

El Cepo Progresista – Capítulo V – Ecuador

LA ARREMETIDA DE LAS CLASES MEDIAS PROFESIONALES CONTRA LA ORGANIZACIÓN POPULAR¹

Sebastián Link Chaparro

Centro de Investigación Fragua

INTRODUCCIÓN

En el año 2007, Rafael Correa, a la cabeza del movimiento Alianza PAIS (AP) y apoyado por el Partido Socialista Frente Amplio, asume como presidente en Ecuador con la promesa de superar la *larga noche neoliberal*. La fragmentación de una burguesía monopólica, el avance de las clases populares organizadas con conciencia indígena y trabajadora; y la emergencia de un movimiento de clases medias anclado en la emergente burocracia, expansión del consumo y credenciales educativas; habían derivado en la crisis del proyecto neoliberal llegando a su peak en 1999 y en 2005.

La emergencia de AP en el gobierno y la promulgación de una nueva Constitución en 2008, redactada por una Asamblea Constituyente (AC), eran vistas como la cristalización en el Estado de los avances de las fuerzas populares y de las clases medias. Sin embargo, al poco andar, lo que parecía ser un avance del movimiento popular², se había transformado

¹ Se agradece las conversaciones y comentarios de los investigadores Mario Unda, Pablo Ospina, James Petras y Juan Kornbliht. A su vez, se agradece a Domingo Pérez, Rodrigo Medel, Diego Calderón, Manuel Cruz y Luis Guamán, por las revisiones del texto y las conversaciones en torno a las tesis que aquí se sostienen. Cabe acotar que asumo la total responsabilidad de lo que aquí se plantea, sin tener ellos responsabilidad alguna por las omisiones o errores que pudieran presentarse en el texto.

² “Se reserva la palabra movimiento para las articulaciones en torno a la estratificación social (movimiento burgués, movimiento popular y movimiento de las clases medias) y relaciones sociales de producción (trabajadores y capitalistas). Los primeros son más comunes en la historia, debido a que el trinomio de la estratificación social es más accesible a la conciencia, pero su actualización

en un proceso de institucionalización política y en el despliegue del patrón de acumulación extractivo rentista exportador, esta vez con mayor presencia y control del Estado sobre la economía. AP había alcanzado algo que los tres gobiernos elegidos democráticamente que le antecedieron no habían podido lograr: finalizar el mandato, implementar reformas políticas y económicas más allá de la oposición de las organizaciones populares, enfrentar el problema de la deuda con los organismos internacionales, y llevar adelante la expansión de la frontera petrolera y minera. En más de cuarenta años de vida democrática, por primera vez el gobierno incumbente es reelegido en 2013 y articula políticas de Estado de largo plazo.

El gobierno de AP ha mantenido con los sectores populares una relación triple: políticas clientelares con las clases populares en tanto masa, como agregado de individuos, donde se intercambia votos por políticas que mejoran las condiciones de vida inmediatas de las personas; promoción y construcción de organizaciones populares ancladas en el proyecto de las clases medias, específicamente el progresismo³ de AP, donde intercambian favores políticos por apoyo; y, finalmente, ataque a las organización populares que construyen un proyecto independiente del de AP, lo que se expresa en criminalización, judicialización, control y destrucción formal de organizaciones.

Por su parte, el gobierno se entiende hegemonizado por las clases medias con un proyecto de sociedad capitalista de derechos universales, el que AP presenta discursivamente como “Socialismo del Buen Vivir”, concepto capturado de las narrativas con pretensión emancipadora emergidas del movimiento popular. Los segmentos de las clases medias que soportan el gobierno corresponden a aquellos anclados en la expansión del consumo, las instituciones educativas y las nuevas burocracias profesionales (frente a las anteriores burocracias de carrera). A su vez, el gobierno se ha enfrentado a distintos grupos de las clases medias, coordinados bajo demandas específicas que en general se dirigen al Estado. Se cuentan entre ellos las organizaciones de empleados públicos, estudiantes universitarios y feministas.

constante en la historia no significa que por ello mismo tenga la fuerza y la tracción que tiene el problema del antagonismo de las clases estrictas”. Ver cap. 1.

³ El concepto se utiliza como equivalente a las alternativas al neoliberalismo latinoamericano, donde prima la heterogeneidad de las experiencias. Dicho con otras palabras, existe pocos elementos comunes a dichas alternativas que permitan hablar de un fenómeno unitario. Ver cap. 1.

Por último, la radical fragmentación de la clase capitalista, en función de diversas estructuras como las regionales, las de administración de las empresas, de los sectores de la economía, entre otras; se presenta en Ecuador en mercados con altos niveles de monopolización. Con ello, el gobierno de AP se ha movido a través de políticas particulares que aseguren el apoyo de personas y grupos de la burguesía, así como también de capitales externos que son buscados por el mismo presidente en función de la inversión asociada al sector extractivo (energía, infraestructura, y exploración y explotación de minería metálica y petróleo). A su vez, la inversión privada es promovida y coordinada, en parte, a través de mecanismos estatales, los que tenderán a reemplazar los mecanismos de mercado que primaron bajo el proyecto neoliberal. Ello se expresa en términos institucionales en la relevancia de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES)⁴ en la acción gubernamental. Por otro lado, la relación será conflictiva particularmente con aquellos grupos empresariales que mantuvieron el control directo de ciertas instituciones públicas y mercados en el periodo neoliberal, como las fracciones financieras y los capitales estadounidenses en la extracción petrolera.

En este texto se aborda la emergencia del gobierno de AP y del movimiento popular ecuatoriano, y cuáles son los elementos que explican su carácter. Se presenta el fracaso del proyecto de Industrialización vía Sustitución de Importaciones (ISI), así como un conjunto de reformas neoliberales dispersas que no logran cristalizar en un proyecto de la clase capitalista en su sentido general. A su vez, se aborda el despliegue del movimiento popular con hegemonía indígena durante los 90', al cual AP disputa las clases medias; así como también la extrema fragmentación de una pequeña clase capitalista monopólica, sobre la cual AP lleva adelante los pactos y negociaciones con grupos y personas en específico.

La tesis que se sostiene en este ensayo es que AP se constituye como un gobierno hegemonizado por las clases medias, especialmente aquellas con credenciales educativas, y que se sostiene en la institucionalización del Estado y del partido. Sin embargo, esta última no se haya acabada, por lo que la coherencia del proyecto exigirá el esfuerzo político de personas particulares, como el mismo presidente Rafael Correa. Para llevar adelante el

⁴ Según como se presenta en la web de la Senplades, esta “es la Institución pública encargada de realizar la planificación nacional en forma participativa incluyente y coordinada para alcanzar el Buen Vivir que anhelamos todas y todos los ecuatorianos” (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo - SENPLADES, 2015).

proyecto del “Buen Vivir”, el Estado se ha apropiado de las rentas del petróleo, ya sea vía aumento del control estatal de la explotación, o bien vía contratos que aseguran un nivel de ganancia al capital para que migre a otros países y/o mercados. Ante la ausencia de política cambiaria, en tanto la moneda circulante en Ecuador es el dólar, AP ha debido articular mecanismos institucionales para apropiarse la renta⁵ que controlaban principalmente los capitales extranjeros. Ello se ancla en la necesidad de fortalecer el aparato estatal. Sin embargo, esta apropiación no ha sido suficiente para sostener el proyecto correísta y la estabilidad política median mecanismos redistributivos; por lo que se ha elevado la deuda externa, emergiendo como principal acreedor China, y se ha presionado la expansión de la frontera extractiva. Sobre esta base, y en función de las emergentes clases medias, el proyecto de AP tiene un marcado carácter progresista ciudadanista.

El texto se estructura de la siguiente forma. En la segunda sección se aborda la emergencia y crisis del proyecto neoliberal. En la tercera sección se da cuenta de las características de las formas estatales y económicas que está construyendo AP. Luego, en la cuarta sección se profundiza en la relación del gobierno con las principales fuerzas sociales del país bajo un esquema de clases⁶. Finalmente, en la quinta sección se concluye.

⁵ Para profundizar en un estudio sobre el rol y carácter de la renta en América Latina, ver la producción de Razón y Revolución, especialmente del investigador Juan Kornbliht.

⁶ El análisis de clase resulta central en este libro. Para su profundización, revisar el capítulo 1.

BURGUESÍA FRAGMENTADA, CLASES MEDIAS EMERGENTES Y CLASES POPULARES DESPLEGADAS. EMERGENCIA Y CRISIS DEL PROYECTO NEOLIBERAL

La historia ecuatoriana de la segunda mitad del siglo XX ha seguido las tendencias generales de lo vivido en América Latina. Un periodo donde primó el proyecto de desarrollo de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI) en los 60' y 70', aun cuando su realización diste mucho de lo prefigurado por el proyecto⁷; luego un periodo de implementación de políticas de liberalización económica y apertura comercial, que derivaron con el tiempo en las reformas articuladas en el marco del Consenso de Washington en los 90' y principios de los 2000'; y en la actualidad un proyecto que pretende potenciar el rol regulador y coordinador del Estado en la economía, y diversificar la matriz productiva, con el ascenso del movimiento, hoy partido, AP desde 2007. Entre las particularidades del Ecuador, se encuentran el que presente más de 40 años de democracia burguesa desde 1979 a la fecha, donde se ha escogido a los gobernantes por medio del sufragio universal⁸, y donde ha prevalecido la inestabilidad política y la imposibilidad de articular políticas de Estado⁹. Además, está el constante ensayo y error de reformas

⁷ Se utiliza el concepto de proyecto para dar cuenta del cómo los agentes, de forma práctica, van constituyendo relaciones lógicas entre una serie de políticas e instituciones para constituirlos en un proyecto, con sus metas, estrategias, creencias y valores correspondientes (ver cap. 1). No se habla de modelo, en primer lugar, por cuanto éste tiende a caer en cierto ideologismo –los agentes hacen lo que hacen por el modelo que tienen en su cabeza, llevando la realidad al modelo; es decir, la causa de la acción de los agentes que prima es su creencia de cómo funciona la realidad. En segundo lugar, por cuanto podría llevar a la creencia de que el proyecto se ha llevado a la práctica y se ha cristalizado en instituciones y estructuras que permiten la emergencia de mecanismos morfoestáticos, los que articulan la serie de acciones de los agentes en una suerte de “modelo” si es que tales mecanismos adquieren altos grados de coherencia. Como se verá más adelante, éste no es el caso de Ecuador: ningún proyecto ha logrado estructurarse en las instituciones del Estado independiente de los agentes que asumen las posiciones y roles determinados.

⁸ Se considera tres momentos cruciales en el desarrollo del sufragio universal en el Ecuador. El primero en 1861 con la eliminación del sufragio censitario; 1929 con la promulgación explícita del derecho a voto de la mujer, y en 1978 donde se elimina de la Constitución la disposición que exigía saber leer y escribir para poder votar. Un cuarto hito, más reciente, constituye la Constituyente de 2008, donde se da acceso al voto voluntario a los adolescentes de entre 16 y 18 años. Otro elemento a considerar es la exclusión de los militares del voto en 1946, el que se les restituye en 2008 (Medina, 2013).

⁹ Dentro del gobierno y de Alianza PAIS existe un profundo acuerdo a este respecto, aunque acotándolo al periodo neoliberal: *“La larga noche neoliberal dejó un profundo desarraigamiento de los procesos de planificación estatal, poniendo al país a la deriva, en medio de los intereses del gran*

neoliberales¹⁰ desde 1984 hasta 2005, teniendo por punto cúlmine la crisis de 1999, tanto en cuanto a las políticas que la desencadenaron como a las formas de resolverla.

El proyecto neoliberal no logra asentarse plenamente, tanto por el fraccionamiento de la clase capitalista, que se expresa en sus referentes partidarios, en su cristalización en los aparatos del Estado y en su fragmentación regional; como por el despliegue del movimiento popular, específicamente del movimiento de trabajadores en los 80', del movimiento indígena en los 90' y 2000', y de las clases medias a mediados de los 2000' (conocido como el “movimiento forajido”). Luego de la crisis de 1999 y dada la radicalización de la inestabilidad política, con tres presidentes elegidos por sufragio universal que no logran terminar sus periodos (Abdalá Bucaram cae en 1997, Jamil Mahuad en 2000 y Lucio Gutiérrez en 2005), emerge el gobierno de AP con la figura presidencial de Rafael Correa, gobierno que logra por primera vez en los 40 años de democracia, articular políticas de Estado con perspectiva de largo plazo.

En este apartado, se da cuenta de cómo emergieron las condiciones que enfrenta AP al momento de construirse como un agente político organizado¹¹ y de llegar al gobierno. Para ello, en primer lugar, se caracteriza las principales tendencias del periodo donde primaron las políticas neoliberales, dando cuenta de su emergencia y despliegue. Y, en segundo lugar, se aborda la crisis del proyecto neoliberal, tanto en términos políticos como económicos.

Resultados del proyecto industrializador y la emergencia de un movimiento popular clasista

El proyecto neoliberal en Ecuador, emerge tras la crisis de la deuda de 1982, la que se enmarca, en términos más generales, en la crisis del proyecto desarrollista latinoamericano articulado bajo las premisas de la Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI)¹².

capital, manteniendo presupuestos de carácter inerciales y de arrastre, sin una visión de horizonte al mediano y largo plazos”(Montayo & Solano, 2013).

¹⁰ Con “neoliberales” se pretende dar cuenta del set de políticas de ajuste estructural, liberalización económica, apertura financiera, coordinación mercantil de los servicios sociales, etc., cuya unidad suele asociarse al Consenso de Washington de 1989.

¹¹ Para una definición de agente organizado y agente colectivo, revisar capítulo 1.

¹² Aquí se utiliza como referente de los proyectos que primaron en dichas décadas en América Latina de la mano de la CEPAL, aun cuando un concepto más correcto sería un proyecto de industrialización dirigida por el Estado hacia dentro –state led, inward oriented (Bértola & Ocampo, 2012)-, se utiliza proyecto ISI por cuanto es más utilizado en el sentido común.

En los años 60' y 70' se desplegó el proyecto ISI de la mano de los militares¹³ y del bonapartismo de José María Velasco Ibarra¹⁴. La apuesta de los gobiernos que se sucedieron en este periodo fue la construcción de una burguesía nacional moderna industrial, en contraposición a las oligarquías terrateniente de la sierra (Quito) y agroexportadora de la costa (Guayaquil), cuyo poder se afincaba en el control territorial y sobre la población indígena en la primera; y en el control del comercio, de las exportaciones cacaoteras y del sistema financiero en la segunda (Burbano, 2006). Sobre esta base, se pretendía construir una democracia moderna capitalista estable, la que fue cristalizada en la promulgación por los militares de una nueva Constitución en 1978, la decimoctava de la historia ecuatoriana como nación independiente y la que daría paso a una transición a la democracia¹⁵. Como se verá más adelante, esta transición resultará fallida en términos de constitución de un bloque en el poder estable, sin poder cristalizar un proyecto país que aglutine a toda la clase capitalista, ni lograr estabilidad en las políticas públicas y los partidos gobernantes (Barrera, 2001).

En el periodo del proyecto ISI se pasa de una economía agroexportadora basada en la producción de banano a una basada en la extracción petrolera, la que fue potenciada con el boom petrolero de los 70'. El acceso a mayores recursos por parte del Estado, permitió a los gobiernos mantener distancia política con las elites costeñas y serranas, cuestión que se expresó en las políticas enmarcadas en el proyecto ISI. Entre estas, destacan las consecutivas reformas agrarias¹⁶ y las políticas de fomento industrial. La primera, implicó la abolición de las instituciones que habían articulado las relaciones sociales de producción

¹³ La Junta Militar del 63' (1963-1966), el de Guillermo Rodríguez Lara (1972-1976) y el del triunvirato (1976-1979).

¹⁴ Asumió la presidencia de Ecuador en cinco ocasiones, 1934-1935, 1944-1947, 1952-1956, 1960-1961 y 1968-1972.

¹⁵ En las discusiones para restablecer la democracia, las fuerzas sociales y políticas se dividieron en tres apuestas: en la izquierda se buscaba la permanencia del gobierno militar para profundizar una revolución nacional dirigida por los militares; en la derecha se demandaba el inmediato retorno al gobierno civil a través de una AC; y cierto campo "progresista" propone un acuerdo cívico-militar para restaurar la democracia (Arteta & Hurtado, 2005). Finalmente primó la apuesta "progresista". Según el reporte de Beterlsmann Stiftung, la oposición de grupos poderosos de derecha a la transición implicó su exclusión en el proceso, cuestión que articulará una situación donde éstos intentarán regresar a la política de forma fragmentada y constante en oposición al proyecto transicional (BTI Bertelsmann Stiftung, 2014).

¹⁶ La primera ley de Reforma Agraria corresponde a 1964 bajo el régimen de la Junta Militar, la segunda corresponde a 1972 bajo el gobierno de Guillermo Rodríguez Lara, y la tercera a 1976 bajo el triunvirato o Consejo Supremo de Gobierno.

en el campo: el huasipungo y el arrimazgo en la sierra, y el precarismo en la costa¹⁷. Los resultados económicos de este periodo destacan al crecer el PIB a una tasa del 8,4% anual entre 1971 y 1981, sin embargo ello no implicó una expansión de la productividad ni de la capacidad productiva futura (Arteta y Hurtado, 2005).

De este proceso destacan dos elementos que se sostendrán hasta el día de hoy. En primer lugar, emerge la Federación Ecuatoriana de Indios (FEI) al alero del Partido Comunista Ecuatoriano, la cual impregnó al movimiento indígena de un carácter clasista (Altmann, 2014; Korovkin, 2010) y permitió una conciencia bajo el trinomio indígenas – trabajadores – campesinos, que también se difundió entre las organizaciones sindicales. Tal hegemonía clasista se expresa en el giro que tendrán las múltiples organizaciones del movimiento popular que irán emergiendo¹⁸, aun cuando el poder de la FEI haya caído luego de la reforma agraria. Y, en segundo lugar, se generó un déficit que llevó a una deuda creciente: la pública pasó de U\$229 millones en 1970 a U\$4.416 millones en 1981; y la privada de U\$57 millones en 1976 a U\$1.452 millones en 1981. Ello generó un ambiente propicio para la crisis de la deuda de 1982, en la que hubo un súbito corte de los flujos crediticios que provenían de los países centrales.

¹⁷ El huasipungo es la forma de trabajo con la que se organizó el trabajo de los indígenas entregados por encomienda en las haciendas serranas ecuatorianas. El terrateniente pagaba al *huasipunguero* por su trabajo con productos y un lote de tierra donde éste podía vivir. El *arrimazgo* fue una institución predominante en Loja de la sierra, donde el trabajador agrícola prestaba entre dos y cuatro días de trabajo a la semana al terrateniente sin percibir por ello salario, a cambio del usufructo de una parcela. Y el *precarismo* fue la modalidad dominante en la producción arrocería de Guayas de la costa, donde un campesino sin tierra cultiva una parcela entregada por el dueño de la tierra a cambio de una renta en producto, sin tener derecho de realizar otros cultivos distintos al arroz o de construir vivienda en la parcela trabajada.

¹⁸ Algunos ejemplos de este giro son la formación de ECUARUNARI en 1972, por el lado del movimiento popular indígena; y de la Confederación Ecuatoriana de Obreros Católicos (CEDOC) en 1938 y la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (CEOSL) en 1962, por el lado del movimiento obrero. Por una parte, ECUARUNARI fue auspiciada por sectores progresistas de la Iglesia Católica (en función del concilio vaticano II y de la Conferencia Episcopal de Medellín, en clara competencia con la hegemonía marxista del movimiento (Carlosama, 2000)) y agrupó a indígenas y campesinos de la sierra que veían caer las viejas instituciones del campo. Al corto andar, dicha organización articuló un proyecto clasista y participará, en 1986, de la creación de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), construida bajo el trinomio indígenas-campesinos-trabajadores. Por otra parte, la CEDOC devendrá la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas en 1974; y la CEOSL girará al poco andar hacia el proyecto socialista con el ingreso masivo de trabajadores manufactureros y de servicios, además de mantener una política de unidad de la clase trabajadora, lo que se expresa en su afiliación al Frente Unitario de Trabajadores (FUT) en los 70'.

Emergencia y despliegue del proyecto neoliberal: fragmentación burguesa e inestabilidad política

La transición a la democracia, luego de 1979, marcó un cambio no solo político, sino que también económico; en tanto se desarrolló en el marco de la crisis de la deuda de 1982, la caída de los precios del petróleo (de U\$40 a U\$15 dólares por barril entre 1980 y 1986), conflictos limítrofes con Perú y la corriente del Niño (Arteta & Hurtado, 2005). A su vez, ello se encuadraba en la crisis global de los proyectos con tintes keynesianos como el Estado de Bienestar y el desarrollismo, y en la emergencia del monetarismo y del proyecto neoliberal. En términos de las políticas económicas, el gobierno de Osvaldo Hurtado (1981-1984)¹⁹ pretendió implementar una serie de medidas de ajuste que derivaran en un régimen de austeridad y de reducción del gasto público, entre las cuales se consideró una reforma tributaria, la reducción del subsidio al gas, y la suspensión del subsidio del trigo. Además, el Estado asumió la deuda privada con la banca internacional en 1983 (Correa, 2011). Frente a las medidas, se sucedieron las protestas y huelgas de sindicatos, empresarios y estudiantes. En este contexto, en 1984 se dio un giro en la política ecuatoriana con el arribo a la presidencia del empresario costeño y ex líder de la Federación Nacional de Cámaras Industriales León Febres Cordero a través de la recién formada coalición Frente de Reconstrucción Nacional (FRN), lo que marca la crisis ya definitiva del proyecto que los gobiernos militares buscaron implantar en el marco del boom petrolero.

Según Burbano (2006), la emergencia del FRN marca el comienzo del giro neoliberal, en tanto logra unificar a los sectores dominantes de las regiones costeña y serrana bajo la pretensión de desmontar las políticas que golpearon a oligarcas serranos y gamonales costeños bajo el proyecto ISI, de tener un mayor control del Estado y de disputar la apropiación de la renta petrolera. Se liberalizó el tipo de cambio y las tasas de interés, se abrió la economía al exterior, y se derogó gran parte del marco institucional anterior (Correa 2011). La primacía del Partido Social Cristiano²⁰ (PSC), por sobre el Partido Liberal y el

¹⁹ Reemplaza al presidente elegido en 1979, Jaime Roldós, quien fallece en 1981 en un accidente de avión. Cabe acotar que Roldós llega al gobierno con el apoyo del partido Concentración de Fuerzas Populares, el que se transforma en opositor una vez asume la presidencia. Así, Hurtado gobernó tan solo con una parte del conglomerado que se había presentado a los comicios, con la Democracia Cristiana y Democracia Popular.

²⁰ Partido creado en 1951, ideológicamente conservador, de carácter serrano con su centro en Quito, impregnado de clericalismo y muy elitista, aunque con pretensiones de derivar en un partido de masas. En 1978, y bajo el proyecto de volverlo un partido de carácter nacional, ingresa una serie de empresarios guayaquileños –región costa-, entre los que se cuenta León Febres Cordero, quienes

Partido Conservador, marcó el giro neoliberal en la política bajo una perspectiva antipartidista²¹, tecnocrática y empresarial de la administración pública y de la conducción económica. Con ello, este gobierno es visto como el ingreso directo y sin mediaciones del empresariado al Estado²² (Freidenberg, 2003), el que parecía al fin unificarse en torno a una coalición, una ideología y un proyecto comunes (Burbano, 2006).

Sin embargo, esta unificación duró poco tiempo: en las elecciones presidenciales de 1988, el FRN ya no existía y el candidato de la alianza entre el PSC y el Partido Conservador, Sixto Durán, no logró pasar al balotaje de la segunda vuelta. Entre las razones del quiebre, y de las dificultades de la clase capitalista por unificarse, se cuentan: la forma corporativa del Estado²³, con defensas gremiales por parte de los empresarios que exigían a los gobiernos políticas proteccionistas (como ocurrió con la industria textil, plástica, metalúrgica, automotriz, etc. (Arteta & Hurtado, 2005)), quienes no estaban dispuestos a competir bajo las reformas del proyecto neoliberal (Burbano, 2006); la mantención de un creciente déficit fiscal y de una balanza de pagos negativa, potenciando la sujeción de los gobiernos a los organismos internacionales promotores del proyecto neoliberal vía deuda;

logran hegemonizar el partido y dar un fuerte giro en su conducción y base social: se pasa a un partido donde el elector se percibe como cliente al que se debe comprar a través de las estrategias empresariales, con un modelo de organización próximo a los negocios (Freidenberg, 2003). De ahí que hoy en día se entienda al PSC como controlado por las fracciones financieras del capital (Gaudichaud, 2008)

²¹ Esto se refleja (1) en que los altos cargos públicos fueran ocupados en una parte sustantiva por independientes, mientras el nombramiento de militantes contó con escasa participación de las dirigencias partidarias; (2) en que el equipo personal del presidente estaba compuesto por gerentes, administradores y empresarios del sector privado; y (3) en que el mismo presidente se reconocía como independiente, obligado a afiliarse al PSC en el contexto de las elecciones parlamentarias con el retorno a la democracia.

²² Si bien no es el primer gobierno que incluye empresarios, antes lo habían hecho los gobiernos de Rodríguez Lara y de Roldós-Hurtado; sí es el primero donde es el empresariado el que controla el ejecutivo directamente y, al menos en un comienzo, como clase capitalista general –no una fracción marginal de ella.

²³ Corporativa en cuanto integra a grupos específicos de la población con ciertos grados de poder en instituciones del Estado, articulándose sus diferencias dentro de este. Ello se asienta en la fragmentación de la clase capitalista y el desarrollo del movimiento popular. Por otro lado, es posible argumentar que el Estado también tenía un carácter clientelar en base a la renta petrolera que fue distribuida entre las distintas clases sociales, tanto para los agentes individuales como colectivos. Ospina (2009) discute el carácter del Estado ecuatoriano, defendiendo la tesis de que su carácter ha sido principalmente clientelista; y no corporativo, como sostiene el gobierno correista en la actualidad. Su argumento estriba en que la sociedad civil no se encuentra organizada. Al respecto, aquí se sostiene que sí se observaría un corporativismo en tanto la clase capitalista está fragmentada, por lo que sus organizaciones son múltiples teniendo un poder afincado en la estructura de clases estricta del capitalismo; y hay ciertos grupos del movimiento popular, más bien marginales, que han tenido la capacidad de ingresar a este Estado corporativizado, como ocurre con el movimiento indígena en la Constitución de 1998.

las diferencias en cuanto a la orientación de las privatizaciones y de los procesos de mercantilización (Ramírez, 2010a; BTI Bertelsmann Stiftung, 2014); y la exclusión de las oligarquías que ahora volvían al poder, aunque esta vez fundadas en instituciones modernas luego de las reformas agrarias (BTI Bertelsmann Stiftung, 2014).

Si bien esta fragmentación²⁴ se expresó en una alta inestabilidad política²⁵, no implicó un retroceso del proyecto neoliberal, pues este se había vuelto hegemónico y era continuamente reforzado dada la sujeción a los organismos acreedores de la deuda ecuatoriana. Ello se expresa en la profundización neoliberal del gobierno socialdemócrata de Rodrigo Borja (1988-1992), de la Izquierda Democrática (ID)²⁶.

Crisis económica del proyecto neoliberal: otra década perdida

En 1992, llega al gobierno Sixto Durán con el apoyo de los partidos Conservador y Unidad Republicana, mientras el PSC lleva por candidato al empresario Álvaro Noboa²⁷. En este gobierno, se lleva adelante un fuerte programa de estabilización, donde el proyecto neoliberal y las consignas del Consenso de Washington se cristalizan de forma definitiva. En el corto plazo, se observa como exitosa la política: el cuarto trimestre de 1994 la economía crece a un 6%, el tipo de cambio se estabiliza, y existe una alta aprobación de la figura del presidente. Los acreedores y los inversionistas confiaron en el proyecto neoliberal en tanto eliminaría las ineficiencias, promovería el crecimiento y mantendría un tipo de cambio completamente predecible²⁸.

²⁴ Remite a una fragmentación partidaria, gremial, regional –con la recurrente postulación a los cargos de presidente y vicepresidente de personas de distintas regiones, costeña y serrana-, etc.

²⁵ Se observa en el hecho de que ningún presidente corresponda al signo político del anterior, en la emergencia de partidos en torno a personas específicas, en su relevancia a nivel nacional y regional con votaciones fluctuantes, en los altos niveles de rotación ministerial, en mayorías fluctuantes en el Congreso, en la volatilidad de las leyes y reformas con la promulgación de dos constituciones entre 1979 y 1998, la presencia de múltiples partidos incapaces de generar alianzas duraderas, etc. (Arteta & Hurtado, 2005)

²⁶ Destacan la reducción drástica de los aranceles, la incorporación de regímenes de maquila y de contratos a tiempo parcial, con la consecuente flexibilización del trabajo; la expedición de la Ley de Zonas Francas; y la prohibición al Banco Central de financiar a las instituciones del Estado (Correa, 2011).

²⁷ Esta situación da cuenta de la inestabilidad política en el Ecuador: Sixto Durán es uno de los fundadores del PSC y había sido su candidato en 1988.

²⁸ Se hablaba del milagro ecuatoriano: un graffiti a finales de 1993 rezaba, “Lo que Dios da es para guardarlo, lo que Sixto da es para gastarlo”; y los economistas y capitalistas confiaban en la habilidad del vicepresidente Alberto Dahik, quien era llamado por algunos el “gurú de la economía”.

Este contexto se articuló como un buen semillero para la emergencia de una euforia minskiana: empresarios y banqueros creían que la buena situación sería permanente y que el Estado protegería los depósitos en caso de crisis²⁹, con lo que se expandió el crédito comercial bancario a niveles nunca antes vistos e insostenibles en el tiempo, con una creciente presencia del dólar en la economía ecuatoriana (de menos del 10% del stock de créditos comerciales bancarios en 1992, a más del 80% en 1999 (Martínez, 2006)). Esta euforia derivó en crisis al desarrollarse en un contexto caracterizado por (1) la imposibilidad de los gobiernos de articular políticas de largo plazo en base a la inestabilidad política, y (2) altos niveles de corrupción³⁰. Si a ello agregamos la expansión del gasto militar en el contexto del conflicto con Perú en 1995, la corriente de El Niño en 1998 (que golpeó principalmente al sector agrícola costero), y la crisis asiática, el endeudamiento se volvió insostenible y, con ello, la crisis se desencadenó³¹.

Frente a la crisis, los gobiernos posteriores siguieron ensayando las recetas neoliberales: prioridad al pago de la deuda, dolarización de la economía, mercantilización de las tierras, privatización de empresas públicas, explotación de recursos naturales a gran escala, eliminación de subsidios, y salvataje por parte del Estado de las instituciones financieras, lo que ascendió al 20% del PIB de 1998 (Latorre & Santillana, 2009).

En estas condiciones, la década de los 90' se transformó en una década perdida más, que se sumaba a los 80', con un estancamiento de la economía³², especialmente del consumo final de gobierno (acorde a las políticas de austeridad), de la inversión y del consumo de hogares (Ruiz, 2013). Los malos resultados económicos se expresaron en una pauperización de las condiciones de vida de las clases populares, sobre todo de indígenas

²⁹ En 1998 se aprueba la Ley de Garantía de Depósitos, con la que se establece una garantía pública e ilimitada del 100% de los depósitos del sistema financiero.

³⁰ Alta rotación de superintendentes del sistema financiero, quienes en su mayoría estaban vinculados con la banca privada; entrega de información falsa por parte de los bancos a la autoridad pública, la expansión de los créditos vinculados, etc. (Martínez, 2006).

³¹ Como lo describe Martínez (2006), *“entre agosto de 1998 y octubre de 1999, la mitad de todos los bancos privados ecuatorianos quebraron. El Estado se apresuró en proteger todos los depósitos: el esfuerzo de rescate, financiado por una rápida expansión monetaria, llevó al colapso de la moneda. Finalmente, el gobierno desechó la moneda nacional e instituyó el dólar estadounidense como moneda de curso legal”*.

³² El crecimiento del PIB anual promedio de ambas décadas fue del 1,8%, frente al 4,9% de los 50', al 4,7% de los 60' y al 8,4% de los 70' (Burbano, 2006).

y campesinos³³, quienes primaron en las movilizaciones de los 90' y primera mitad de la década del 2000'. Por su parte, la crisis financiera de 1999 implicó un duro golpe a las clases medias, quienes sufrieron la pérdida de sus ahorros y un shock negativo en el consumo ante la subida de precios³⁴. La primera década de los 2000' marcó una recuperación de la economía ecuatoriana, en tanto promedió un 4,5% de crecimiento anual del PIB, pero nuevamente sin significar un desarrollo sustantivo de la capacidad productiva. A su vez, se desarrolló una crisis política de magnitudes con la caída de 3 presidentes entre 1997 y 2005.

Crisis política del proyecto neoliberal, despliegue del movimiento popular y emergencia de AP

La crisis política expresada con la caída de tres presidentes, tendrá el carácter de crisis de legitimidad del sistema político, la cual se fue incubando desde la misma transición a la democracia de 1979 y que se vio radicalizada luego de la crisis de 1999. Este apartado trata de cómo la crisis neoliberal se expresa también políticamente, a través del despliegue del movimiento indígena y del movimiento de clases medias. Este proceso va a marcar la relación de suma cero dentro de la sociedad ecuatoriana. Mientras uno sumaba, el otro restaba. La historia de estos derrocamientos es la historia también de cómo una fuerza estructural de Ecuador cae y da paso a las clases medias para capitalizar en las fuerzas populares que pierden el liderazgo de la CONAIE, ante su colaboración con Lucio Gutiérrez.

En los años 90' prevalecieron cuatro agentes colectivos en el movimiento popular, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), la Coordinadora de Movimientos Sociales (CMS), el Frente Popular (que incluye a profesores públicos y estudiantes), y el Frente Unitario de los Trabajadores (FUT), cuya relevancia irá en descenso (Ramírez, 2010a). Para la caída de Abdalá Bucaram en 1997, quien gobernó desde 1996, el movimiento popular utilizó como repertorios de acción el levantamiento

³³ A inicios de los 90' la pobreza era de un 62,1% y la indigencia de un 26,1%, los que subieron en 1999 a 63,6% y a 31,3% respectivamente (Burbano, 2006). Según datos del BM, al 2000, en los sectores rurales la pobreza ascendía a 82,2% y en la ciudad a 54,6%.

³⁴ Una muestra de qué tanto les afectó es observar los datos migratorios. Entre 1999 y 2001, de las 450 mil personas que dejaron el país, menos del 8% estaba desempleado y el 60% de los mayores de edad tenía título universitario o se encontraba estudiando. Cabe acotar que con esto Ecuador recibió remesas de 2.500 millones de dólares anuales entre 1999 y 2001, dinero que fue gastado en más del 76% por las familias receptoras en consumo, educación y vivienda (Ochoa, 2010).

general indígena, la toma de iglesias, el paro y la huelga, las marchas, la ocupación de espacios públicos, y el humor y subversión de símbolos de poder (De la Torre, 2008).

Como resultado de las movilizaciones y de la impronta capitalista, liderada por el PSC, se elaboró la Constitución de 1998³⁵, a través de la cual los capitalistas buscaban dar viabilidad a la privatización de las áreas estratégicas³⁶, profundizar el presidencialismo y consolidar el proyecto neoliberal, y a través de la cual el movimiento popular y las organizaciones de izquierda buscaban la ampliación de derechos sociales. Así, el texto legal cristalizó en la agenda neoliberal y la ampliación de derechos (Ramírez, 2010a), en el que destaca la incorporación de la CONAIE al Estado a través de la creación del Consejo de Derechos de Nacionalidades y Pueblos del Ecuador donde controlaría la educación, la salud y los proyectos de desarrollo asociados a la población indígena (con proyectos del Banco Mundial (BM) liderados por el activo indígena). Su posición hegemónica³⁷ ha derivado en tensiones con las otras organizaciones indígenas, cuestión que ha sido utilizada por los gobiernos para favorecer la emergencia de organizaciones que compitan con la CONAIE (Altmann, 2014).

El segundo presidente en caer producto de la movilización popular fue Jamil Mahuad, quien gobernó entre 1998 y 2000. Avalado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), trató de enfrentar la fragilidad del sistema financiero y la debilidad fiscal a través del recetario neoliberal, lo que desencadenó la crisis de 1999. Producto de las presiones de la CONAIE y sus aliados urbanos, Mahuad reestableció el impuesto a la renta suspendido al iniciar su

³⁵“En 1998, la nueva Constitución de la República elevó a principios constitucionales muchos de los fundamentos del neoliberalismo, tales como las privatizaciones de servicios públicos o la desregulación de la inversión extranjera. Además, estableció la total autonomía del BNCO Central del Ecuador, el cual hasta entonces dependía de forma indirecta al Gobierno Central” (Correa, 2011).

³⁶ Desde los 90’ se implementó la apertura de la extracción petrolera a los privados, lo que implicó que del 56% de producción estatal versus el 44% de producción privada en 2001, se pasara a un 37% público versus un 63% privado en 2005; lo que iba asociado a un aumento en los ingresos y las rentas apropiadas por las compañías privadas, cuyo punto máximo se alcanzó en 2005 (Ruiz, 2013).

³⁷ La CONAIE tiene bases en las regiones de la Sierra a través de ECUARUNARI (45%), del Amazonas a través de la CONFENIAE (30%), y de la Costa a través de CONAICE (25%), sumando un total de 804.801 afiliados al 2007; a diferencia de organizaciones con presencia principalmente en la Sierra, al 2007, como la Federación Ecuatoriana de Indios (FEI) –ligada al Partido Comunista de Ecuador, con 5.655 miembros; lideró las movilizaciones populares previas a las reformas agrarias de los gobiernos militares, luego de las cuales perdió sus bases con la abolición del huasipungo-, la Confederación de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (FENOCIN) –ligada desde los 90’ al Partido Socialista de Ecuador, con 109.278 miembros-, y el Consejo Ecuatoriano de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos (FEINE) –ligada a las iglesias evangélicas, con 26.384 miembros (Altmann, 2014).

gobierno, impuso un tributo especial a los vehículos de lujo y reconsideró la suspensión de subsidios. Frente ello, el PSC dejó de sostener al gobierno y las organizaciones indígenas instaron a la creación de un poder paralelo al Congreso a través de Parlamentos de los Pueblos, la emergencia de un gobierno revolucionario y la designación popular de nuevos magistrados para la Corte Suprema de Justicia. En paralelo, personeros de la CONAIE mantenían reuniones con mandos medios del ejército, lo que derivó en el ingreso de cientos de indígenas junto al ejército al Parlamento el 21 de enero de 2000, con lo que se destituía el gobierno de Mahuad y se conformaba la “Junta de Salvación Cívico Militar”. Sin embargo, al día siguiente, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas desconoció a la junta y devolvió el poder a los civiles, esta vez al vicepresidente Gustavo Noboa. El apoyo de la población era rotundo: encuestas revelan que el 70% de la población estaba de acuerdo con el derrocamiento (Ramírez, 2010a). Sin embargo, este apoyo se disolvía al no tener forma orgánica, por lo que no puede ser considerado como acumulación de poder por parte del movimiento popular (Barrera, 2001).

Dos elementos resaltan de este evento. El primero de orden ideológico en tanto nunca se habló de golpe de Estado, sino más bien de rebelión popular. Con ello, se instaló en el lenguaje político nacional la figura de la revolución como transformación radical del orden político anclado en un proyecto de país. Y el segundo, asociado a lo anterior, es que se pone en evidencia dos estrategias por parte del movimiento popular: una que ponía énfasis en el carácter de fuerza democratizadora, con lo que debía ser respetuoso de las instituciones burguesas; mientras la otra planteaba la insubordinación como única forma de hacerse del control estatal (Ramírez, 2010a; Le Quang, 2010). Ahora bien, para el movimiento indígena estas dos estrategias no eran del todo contradictorias, pues la CONAIE, a través de la creación de su brazo político el partido Pachakutik en 1995, sostuvo una doble estrategia: construcción y conducción del movimiento popular, y participación de las instituciones del Estado (Santillana, 2006)³⁸.

Del 2000 al 2002, el movimiento popular comienza a desgajarse: por un lado, en las movilizaciones de 2001, la CONAIE se distancia de la CMS, asociada a sectores urbanos,

³⁸ De forma más específica, las posiciones dentro del movimiento indígena pueden ser clasificadas de la siguiente forma: (1) etnopragmáticos, quienes sostienen la doble estrategia bajo el uso de los recursos del Estado y de las alianzas; (2) etnodoctrinarios, que desde una identidad indígena y pobre apuestan al cambio social; y las corrientes minoritarias de (3) etnoradicales, que pondrán énfasis en su carácter étnico, y de (4) neo-leninistas indigenizados (Ramírez, 2008).

y refuerza su carácter indígena y campesino; aún cuando mantiene una vocación hegemónica de hacer de sus ideas las ideas de la sociedad, bajo el slogan “*nada solo para los indios*” Con la emergencia del Pachakutik en 1995, la CONAIE poseía una serie de autoridades indígenas además de las organizaciones locales, con lo que tenía la capacidad de reactivar y coordinar a todo el movimiento indígena a nivel nacional. En este momento la doble estrategia de la CONAIE empieza a enfrentar una serie de problemas. Por un lado, va perdiendo control del partido Pachakutik, el cual lleva candidato propio a las elecciones presidenciales de 2002 mientras la CONAIE se alía con Lucio Gutiérrez, coronel que participó del derrocamiento de Mahuad y que constituía una organización política propia conducida por los militares, “Sociedad Patriótica”. Y, por el otro lado, las fricciones internas se radicalizan, sobre todo dada la implicación de dirigentes e intelectuales indígenas en el gobierno, así como también en proyectos de desarrollo del BM.

El triunfo de Gutiérrez hizo que el movimiento indígena se dividiera, entre quienes apoyan la incorporación al gobierno y quienes la rechazan, pues la incorporación significó el uso de las fuerzas acumuladas por la CONAIE para sostener y legitimar el nuevo gobierno. Aquellos que sostenían el apoyo, tendían a equipararlo a los casos de Hugo Chávez en Venezuela y Evo Morales en Bolivia; así como también, rechazaban radicalmente la posibilidad de triunfo del candidato opositor, el multimillonario Álvaro Noboa. Y quienes se oponían daban cuenta de los acuerdos del militar con sectores empresariales y bancarios, y con organismos internacionales, cuestión que articulaba el gobierno de Gutiérrez como “*un proyecto en disputa*” (Saltos, 2002).

Al poco andar las tensiones se fueron clarificando y la CONAIE terminó quebrando sus relaciones con el gobierno al rechazar una ley enviada por este y recomendada por el FMI. Esta consistía en el aumento de la jornada laboral de 40 a 48 horas semanales, facilidades para la remoción de empleados públicos, y el congelamiento de los salarios. Además, el gobierno de Gutiérrez suscribió la “Estrategia Asistencia País”, mediante la cual se buscaba consolidar las políticas macroeconómicas del proyecto neoliberal, fortalecer la gobernabilidad y realizar reformas estructurales para la reducción de la pobreza (Albuja & Dávalos, 2013). Así, luego de haber permitido el ascenso del gobierno, el desprestigio del movimiento indígena fue en ascenso, lo que se radicalizó en el acuerdo que desarrolló el Pachakutik con los partidos tradicionales PSC e ID, para enjuiciar al presidente: había

negociado con los “dueños del poder” (Ramírez, 2010a), lo que los militantes de AP llamarán más tarde la “partidocracia”.

La caída de Lucio Gutiérrez se desencadenó por acusaciones de corrupción y la nombramiento arbitrario de miembros de la Corte Suprema de Justicia, en condiciones donde el movimiento indígena y el PSC se habían ya desligado. Pero esta vez, las movilizaciones no fueron protagonizadas por el movimiento popular, sino que más bien por la acción disgregada y ciudadanista de las clases medias y pequeñas organizaciones populares conocida como la “rebelión de los forajidos”, donde predominó la presencia de ONGs, jóvenes, mujeres, la FEINE, etc. Los repertorios de acción utilizados cambiaron radicalmente, pues ahora se hacía expresiones de fuerte impacto comunicacional, la toma de espacios públicos, formas de celebración del fútbol y la música, uso de objetos cotidianas, marchas nocturnas; protesta en la casa de políticos, en el parlamento y en lugares de representación diplomática de países como Brasil y Estados Unidos; asambleas locales, foros públicos, cartas a periódicos, etc. El énfasis de las movilizaciones, esta vez, estuvo puesto sobre la corrupción, el autoritarismo, el Estado de Derecho, el no al TLC con Estados Unidos y la defensa de Quito (De la Torre, 2008; Ramírez, 2010a).

Hasta aquí cabe destacar las fuerzas que había acumulado el movimiento indígena como parte integrante del movimiento popular, cuyo auge ideológico y organizativo se observa en el levantamiento general del 2001. Por un lado, se observa un desarrollo ideológico fuerte, donde se articula un proyecto de sociedad más allá de reivindicaciones puntuales y donde el movimiento es capaz de instalarlo en la esfera pública (Cholango, 2013). Además, logra construir un brazo político, el Pachakutik, y aprovechar sus dirigentes insertos en el Estado para la coordinación de la movilización popular (Le Quang, 2010). Si bien la doble estrategia desplegada por la CONAIE tuvo rendimientos en la caída de Jamiel Mahuad, hizo retroceder al movimiento indígena en cuanto a sus fuerzas luego del apoyo fallido a Lucio Gutiérrez y las posteriores conversaciones con los partidos ya ampliamente deslegitimados. Dicho con otras palabras, tras el fracaso de la alianza expresada en la candidatura Gutiérrez, el movimiento indígena no tuvo la capacidad de repliegue.

Con la caída de Gutiérrez, asume el vicepresidente Alfredo Palacio, quien reforma la Ley de Hidrocarburos y, con ello, el Estado se apropia del 50% de las ganancias

extraordinarias³⁹ que pudieran tener las petroleras. Es en este contexto donde emerge la figura de Rafael Correa como Ministro de Economía, quien, en muy poco tiempo, marca un giro importante en los lineamientos de la política petrolera en Ecuador. Elimina el Fondo de Estabilización Inversión Social y Productiva y Reducción de Endeudamiento Público (FEIREP), con el que se había financiado la deuda externa y que había sido un instrumento que favoreció la apropiación de rentas por parte de los capitales transnacionales, además de estar controlado por los banqueros; y lo reemplaza por la cuenta de Reactivación Productiva y Social del Desarrollo Científico-Tecnológico y de la Estabilización Fiscal (CEREPS), con el que se determinó que el 35% de los fondos, como máximo, podía ser destinado al pago de la deuda, mientras el resto iría al Fondo de Ahorro y Contingencia (20%) y a la inversión social en educación, salud, cultura, medio ambiente, ciencia y tecnología, etc. (45%).

Por otro lado, en un contexto donde la crítica a los gobiernos se vinculaba al imperialismo norteamericano, Correa renuncia ante la negativa del BM a un préstamo por 100 millones de dólares, lo que era respuesta al rechazo del ministro a privilegiar la deuda y al cuestionar el TLC con Estados Unidos. Así, emerge la figura del próximo gobernante y se da un giro a la política que había prevalecido durante las últimas tres décadas (Ruiz, 2013). El despegue electoral final del movimiento AP antes de arribar al gobierno, será el compromiso de convocatoria a una AC, promesa que fue sellada al no presentar candidato alguno al Congreso. El movimiento emergente enfrenta así exitosamente la desconfianza que prevalecía con los partidos políticos existentes (Bonilla, 2008).

En definitiva, un movimiento popular indígena en retroceso tras el fracaso de Lucio Gutiérrez; una clase capitalista fragmentada y cuyos partidos, fuertemente deslegitimados, se retiran a las regiones de origen (Burbano, 2006), mientras el proyecto neoliberal ha entrado en crisis; y unas clases medias emergentes movilizadas en contraposición a la institucionalidad política vigente, constituyen las condiciones sobre las cuales emerge AP. En este contexto y bajo la “Revolución Ciudadana”, AP levantó las demandas que los segmentos organizados de las clases populares y de las clases medias habían levantado contra el proyecto neoliberal. Para constituirse, primero como movimiento y luego como partido, AP agrupó organizaciones de clase media como Jubileo 2000 Red Guayaquil,

³⁹ Se determina un precio de tendencia del petróleo. En caso de que el precio efectivo se encuentre sobre éste, las ganancias obtenidas por el diferencial de precios son consideradas como ganancias extraordinarias.

Iniciativa Democrática, Acción Democrática Nacional y el Movimiento Alianza Alfarista Bolivariana, entre otras (Albuja y Dávalos, 2013; Ospina, 2009), mientras rechazó alianzas con las organizaciones de izquierda existentes en Ecuador en tanto se consideraban plenamente deslegitimadas. Con ello, AP se dedicó a construir fuerza propia electoral bajo una táctica territorial constituyéndose con un hábito de “seriedad”, frente a la corruptela que primó en la “larga noche neoliberal” bajo la hegemonía de la “partidocracia”.

A la fecha, el éxito político de AP ha sido rotundo: en 2013 el presidente Correa es reelecto, en el parlamento controla 100 de 137 escaños frente a las tres mayores fuerzas parlamentarias que le siguen⁴⁰, y recientemente formó el conglomerado político Unidos⁴¹ donde AP se alía con las organizaciones tradicionales de izquierda de Ecuador, cuestión que realiza una vez puede ser hegemónica en la agrupación.

INSTITUCIONALIZACIONES: EL DESPLIEGUE DEL PROYECTO DE ALIANZA PAIS

Rafael Correa y AP han hegemonizado la política ecuatoriana, tanto ideológica, a través de la crítica a la “*larga noche neoliberal*”; como políticamente, siendo el principal partido político en la actualidad⁴². Su emergencia, como ya se desarrolló, se produce en un contexto de crisis del proyecto neoliberal. Este entra en crisis ante el desarrollo y despliegue de las organizaciones populares y de las clases medias, y ante la fragmentación de las burguesías. El retroceso de la CONAIE, organización hegemónica del movimiento popular,

⁴⁰11 escaños de CREO, partido de derecha creado recientemente en oposición al gobierno de Rafael Correa; 6 escaños del tradicional PSC; y 5 escaños del instrumento partidario más fuerte del movimiento indígena, el Pachakutik. Por su parte, a los miembros de la Asamblea Nacional se les llama desde ciertos sectores los “levantamanos” por el control correísta.

⁴¹ El Frente Unidos fue oficializado el 18 de septiembre de 2014, de tal forma de fortalecer el proyecto del Buen Vivir. Entre las organizaciones que conforman el pacto programático, se encuentran el Partido Comunista Ecuatoriano, el Partido Comunista del Ecuador, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, el Movimiento Autonomático Regional, Alfaro Vive Cari, el Pachakutik-Chimborazo, etc.

⁴² El 2013, Rafael Correa vence en la carrera presidencial con un 57,17%, frente al 22,17% del candidato con la segunda mayoría, el empresario Guillermo Lasso; y Alianza PAIS obtiene el mismo año un 52,17% de las preferencias en las elecciones legislativas, lo que implicó casi un 73% de los escaños legislativos. Las diferencias entre el porcentaje de votación y los escaños ocupados en el parlamento, pueden explicarse por el redistritaje favorable a Alianza PAIS bajo el nuevo sistema electoral (BTI Bertelsmann Stiftung, 2014).

cerró la deslegitimación de los partidos políticos, pasando el Pachakutik al grupo de la “partidocracia”. En este contexto, AP expresa el avance de las clases medias, específicamente de las ancladas en credenciales educativas y en las “nuevas” burocracias profesionales; pero también la posibilidad de expansión del extractivismo minero y petrolero, obstaculizada por el activismo popular, sobre todo indígena y campesino. Con ello, el gobierno de AP ha contado con el soporte de algunas fracciones de la clase capitalista, entre las que destacan las extractivas e industriales.

AP ha sido un partido de rápido crecimiento y consolidación. Ante el retroceso de los partidos tradicionales, relegados a los liderazgos regionales, el partido logró hegemonizar las elecciones. Sin embargo, esta organización es de corta data y aún no logra una institucionalización suficiente que le dé autonomía del presidente Rafael Correa. Se le acusa de forma recurrente de personalista y autoritario, que está sobre las leyes y que nadie puede criticarlo. Diversos investigadores sociales han relevado el personalismo correísta, sin embargo suelen no profundizar más allá de esta apariencia. Tras del personalismo, tanto en el Estado como en AP, dan cuenta de su inacaba institucionalización, en tanto para sostenerse requieren de grandes esfuerzos agenciales. En este sentido, el personalismo de Correa y la constante explicitación de la razón de Estado, dan cuenta de lo ausente, lo aún no logrado por el gobierno: un rol presidencial cuyo “poder” se afinque en la investidura, en vez de la persona; y un estado de derecho y políticas de Estado legitimados por la población⁴³.

La pregunta que conduce este apartado es cuál es la institucionalidad política que está construyendo AP en Ecuador, así como también el proyecto que está desplegando. Se fortalece el Estado a través de la diversificación y ampliación de su rol en la sociedad; se sostiene una estabilidad política vía reparto de la renta apropiada por el Estado, donde destacan las políticas sociales; y se reprimariza la economía en función de financiar un proceso de diversificación productiva. Sin embargo, la renta apropiada no es suficiente para sostener el proyecto, lo que presiona el endeudamiento. Ante la imposibilidad de apropiarse de la renta vía política monetaria, se requiere una institucionalización mayor del Estado que

⁴³ Recientemente, el ex vicepresidente de Rafael Correa, Lenin Moreno, criticó los cambios a la Constitución que AP que está promoviendo que permitan la reelección indefinida. Al respecto, plantea que el partido no ha sido capaz de generar liderazgos. En función de lo aquí argumentado, ello se expresa lo inacabado de la institucionalización partidaria y estatal.

pueda capturarla, lo que se cristaliza en la Constitución de Montecristi y en el mismo accionar del gobierno.

El peso de la deuda

La deuda ha sido un problema permanente del Ecuador. Por un lado, ha permanecido alta en ambos proyectos de desarrollo, el ISI y el neoliberal; y por el otro, se ha sustentado en un déficit de la cuenta corriente que no se ha podido revertir. Esta deuda con los organismos externos, como el FMI y el BM, implicó un disciplinamiento de los distintos gobiernos ecuatorianos en función del proyecto neoliberal.

Tal como planteara Rafael Correa cuando fuera ministro en 2005, al ascender como presidente cesó el pago del 70% de la deuda externa. Ello provocó una caída en el precio de los bonos ante la salida al mercado de acreedores y tenedores de la deuda, ante lo cual el gobierno los compró secretamente a un precio próximo al 20% de su valor. Haciendo uso de la dinámica del sistema financiero, el gobierno logró reducir en 7.000 millones de dólares la deuda, incluido el ahorro por concepto de interés (Lebrun, 2013). Como efecto de esta jugada financiera, solo China estuvo dispuesta a prestar dinero a Ecuador, a cambio de que este le asegurara una provisión de materias primas en el futuro, específicamente de petróleo. Con ello, se pasó de los organismos controlados por Estados Unidos a China, cuyos requerimientos de préstamo e inversión resultan menos restrictivos que los acostumbrados por el FMI, el BM y el Banco Interamericano del Desarrollo (BID). Al 2010 ya se acumula un déficit de 4.000 millones de dólares al menos, cuya cobertura no está garantizada. Con ello, la expansión del extractivismo parece ser la única solución para obtener los recursos necesarios (Romero, 2010).

Captación de recursos: reforma tributaria y renegociación contratos petroleros

En función de captar recursos para las políticas de AP, y otorgar al gobierno de mayor autonomía respecto a las clases dominantes así como sostener el apoyo de diversos grupos sociales, se llevó a cabo una reforma tributaria y la renegociación de los contratos petroleros. La primera ha derivado en un cambio de la estructura de ingresos del Estado ecuatoriano, con un aumento de la participación de los ingresos tributarios. Además de ampliar la base impositiva, se modernizó los

sistemas de gestión de la captación y administración de los impuestos, lo que ha implicado en el neto una mayor recaudación.

Por su parte, la renegociación de los contratos petroleros permitió que el Estado captara la renta petrolera. Dado que no es movilizable por el capital, es factible su disputa sin que haya un flujo de capitales al exterior. Para ello, se transformó los contratos de participación en contratos de prestación de servicio, pagando una tarifa fijada desde el Estado, herramienta que utiliza el gobierno para apuntalar la producción en ciertos campos de operación, y promover nuevas inversiones. Otro mecanismo de captura de la renta es la expansión de la explotación estatal, que pasa a controlar el 62% de la extracción de petróleo en 2010, frente al 47% de 2006. Si a ello agregamos el boom del precio de los *commodities* e impuestos como a la renta y a las utilidades, el Estado pasó de capturar 5.645MM de dólares a 19.583MM. (Ruiz, 2013).

Nuevo arreglo institucional: la Asamblea Constituyente

La AC elaboró la Constitución de Montecristi, la que constituyó el programa y guía de la alternativa de AP al neoliberalismo. La asamblea fue desarrollada en un momento en el cual el gobierno aún se estaba asentando en el poder y es el inicio del proceso de institucionalización del Estado. Hay quienes han leído la constituyente como expresión del combate social y político antioligárquico y antiimperialista desarrollado años antes, mas no anticapitalista (Gaudichaud, 2008). Hay otros que han observado la Constitución como una hoja de ruta para superar el capitalismo (Acosta, 2013a), o como una expresión de la soberanía y la dignidad del pueblo ecuatoriano (Alvarado, 2013).

El proyecto del Sumak Kawsay o Buen Vivir, con una fuerte base garantista que reconoce incluso a la naturaleza como sujeto de derechos, permitió articular las proyecciones de ambientalistas, marxistas, teólogos de la liberación, indígenas, afroecuatorianos y feministas, entre otros, y aislar a liberales y neoliberales que sostenían el argumento que primó durante la “larga noche neoliberal”: más mercado (Cortez, 2011). Con ello, permitió la “politización” de cientos de miles de ciudadanos del país (Gaudichaud, 2008), sin embargo la unidad y la movilización de los sectores antineoliberales no dejó de ser coyuntural y espuria. En su desmedro, el gobierno y AP salieron fortalecidos (Acosta, 2013a), anclados en la institucionalización de un nuevo Estado: fortalecimiento del Estado frente al capital y las fuerzas populares más críticas con el proyecto emergente, fortalecimiento del poder ejecutivo frente a los otros segmentos institucionales, y fortalecimiento del poder central frente a

las instituciones estatales locales⁴⁴. A su vez, AP logró coaptar la narrativa que había primado en el movimiento popular en el periodo neoliberal, incorporando una serie de registros críticos en discursos y documentos. Destaca, por ejemplo, la cita recurrente a teóricos postcoloniales, demócratas radicales, ecologistas y economistas heterodoxos (De la Torre, 2013).

Según Echeverría (2013), y tal como ocurrió con la Constitución de 1998, la carta fundamental de Montecristi presenta un doble registro: garantista e hiperpresidencialista. Frente a ello, al 2009, Pablo Ospina planteaba una doble estrategia frente a esta dualidad por parte de las fuerzas populares: apoyar el control del Estado sobre el capital, pero resistir su *“obstinada y sistemática voluntad de expropiar a las organizaciones de la sociedad de las herramientas del ‘poder social’”*. Sin embargo, esta doble estrategia peca, siguiendo a Arboleda (2008), de no conocer la base objetiva, en términos de fuerzas sociales, que sostiene al presidente y a su partido, lo que termina por fortalecer al enemigo. Para Arboleda, esta doble estrategia solo sería posible cuando se tiene *“poder, autonomía, presencia”*.

Una vez elaborada la Constitución, la unidad alcanzada entre las fuerzas populares se desgarró y no hubo fuerzas capaces de hacer cumplir lo escrito en la misma. Esto ha implicado una resistencia disgregada y con escasa efectividad frente al no cumplimiento de la Constitución por parte del gobierno⁴⁵. De hecho el mismo Rafael Correa planteó el 21 de julio de 2012 su incomodidad ante lo que concibe como un *hipergarantismo* de la Constitución, promoviendo su modificación dado que habría un abuso de las acciones de protección que impiden la gobernabilidad del país.

⁴⁴ Si bien Alianza PAIS ha tenido un control creciente de los gobiernos locales, controlando en la primera administración 16 de 24 puestos y en la segunda 19, el gobierno ha debido hacer frente a la emergencia de oposición regional, principalmente en la Costa. No ha existido una oposición fuerte autonomista a nivel regional, como sería el caso de Bolivia, en tanto ha estado relegada a Guayas principalmente, en Guayaquil, sin lograr movilizar a la población más allá de los capitalistas y sus aliados. El control del gobierno central ha implicado la recentralización de autoridad y recursos, la capacidad de que el mandatario pueda reducir las transferencias por ingresos del petróleo a gobiernos subnacionales; el mayor control de los gastos de los gobiernos locales, con el control pleno de los remanentes del gasto de estos, etc. (Eaton, 2014).

⁴⁵ Se le ha acusado de incumplir múltiples elementos de la Constitución. Entre estos, se cuentan el carácter laico del Estado (frente a la introducción del registro religioso en la discusión sobre matrimonio homosexual y la legalización del aborto); la consulta indígena con la reforma a la Ley Minera (que flexibiliza los requisitos ambientales y sociales del capital trasnacional para la inversión petrolera, así como también la participación de la población afectada); y la autoproclamación del ex Tribunal Constitucional como Corte Constitucional para acelerar el proceso de aprobación constitucional (este debería constituirse mediante concurso público y con una Comisión Calificadora).

La gran diferencia entre el gobierno y las organizaciones populares, sobre todo indígenas y campesinas, estriba en la profundización del patrón de acumulación rentista extractivista exportador. Con ello, todo aquel que se oponga a ello, aunque sea en función de los derechos garantizados en la Constitución, es deslegitimado y criminalizado por el gobierno bajo las distinciones de lo razonable / lo irracional, lo posible / lo imposible, y también tratando de separar los intereses de los dirigentes de las organizaciones y sus bases.

Políticas sociales y mejoramiento de las condiciones inmediatas de vida

Por su parte, las políticas públicas se constituyeron en una fuerte herramienta del gobierno por mantener el apoyo de fracciones de todas las clases sociales, lo que se ha expresado en la capacidad de Rafael Correa de poder ganar repetidas elecciones (Petras, 2013). La mayor cantidad de ingresos captados por el Estado, permitió un incremento de la inversión social del 4,8% del PIB en el 2006 a un 7,9% en el 2010 (Ponce & Acosta, 2013). En términos más específicos, este gasto público implicó el aumento de la cantidad de hospitales, la caída del precio de los medicamentos a través de la compra a Cuba, el aumento del gasto en educación, la implementación del almuerzo gratis para los niños en el colegio, el desarrollo de micro créditos, el incremento del sueldo mínimo, entre otros (Petras, 2013). Y en el ámbito laboral, se experimentó una recuperación del salario real (Ponce & Acosta, 2013)⁴⁶, una caída del desempleo⁴⁷, una expansión de la cobertura del contrato permanente entre la fuerza de trabajo⁴⁸ y la expansión de la cobertura de la seguridad social⁴⁹. Sin embargo, estas tendencias conviven con dinámicas precarizadoras: el subempleo llega al 43% y la ocupación en jornada completa no supera el 50% de la masa de trabajadores (Lebrun, 2013), lo que se condice con la caída de la ocupación de más de 40 horas semanales de 48,6% en 2007 a 37,2% en 2012.

Dos de los mayores éxitos de la política social de AP han sido la reducción de pobreza y la disminución de la desigualdad: la primera cayó del 37,6% en 2006 al 25,6% en 2013⁵⁰; y en cuanto a la segunda, el coeficiente de gini cayó de 0,56 en 2007 a 0,48 en 2012, y la relación entre el 10%

⁴⁶ Se pasa de, aproximadamente, 170 dólares en 2006 a aproximadamente 230 en 2013.

⁴⁷ Al 2007 el desempleo ascendía al 5%. Con la crisis de 2009 llegó a valores próximos al 6,5%, para luego descender al 4,1% en 2011.

⁴⁸ La cobertura del contrato permanente sube del 30,7% en 2007 al 36,1% en 2012

⁴⁹ La afiliación de la población económicamente activa al sistema de seguridad social giraba en torno al 30% entre 2003 y 2008, ascendiendo al 45,7% en 2012.

⁵⁰ Al ver este indicador por sectores, la tendencia a la baja se mantiene: en el sector rural pasa del 60,6% al 42%, y en la ciudad del 25,9% al 17,6%.

más rico y el 10% más pobre de Ecuador de 37,4 veces en 2006 pasó a ser de 26,1 en 2012 (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo - SENPLADES, 2013). Estos éxitos, a su vez, se afincan en la mayor participación del trabajo frente al capital en el PIB⁵¹. Estas condiciones han posibilitado el apoyo de las masas populares a través del voto, destacando el uso del “Bono de Desarrollo Humano”⁵² que fue aumentado de \$35 a \$50 dólares mensuales en enero de 2013, previo a las elecciones presidenciales de febrero.

En definitiva, se establece mecanismos permanentes de flexibilización del trabajo; y se contrarresta sus efectos precarizadores mediante políticas públicas que dependen de la renta petrolera. Dicho con otras palabras, estas políticas pueden contraerse en un futuro, con lo que los efectos precarizadores de la flexibilización laboral se actualizarán.

Institucionalización estatal burocrática

Si bien se observa mejoras en las condiciones de vida materiales de la población, “todos son beneficios que abonan a restar real potencial de poder a posibles sujetos transgresores, a mantenerlos en el limbo de las migajas y de las voces que solo pueden hablar en el menú preestablecido de las elecciones o los referéndums” (Arboleda, 2008). Con ello, el gobierno está profundizando los elementos clientelares que el Estado ecuatoriano venía arrastrando hasta aquel entonces, donde el elector se vuelve un cliente que debe responder con “subordinación política y lealtad en el comportamiento” (Ospina, 2009), relegando la participación política a votar en repetidas elecciones (De la Torre, 2013). El mantener el apoyo político resulta hoy costoso al gobierno correísta, lo que deriva en una presión más para la expansión del extractivismo para captar los recursos suficientes (Andrade, 2010).

⁵¹ Al ver la participación del capital y del trabajo en el PIB, se observa una mayor participación de las remuneraciones con un 32% en 2007 a un 36% en 2013, según estadísticas del Banco Central del Ecuador; mientras la participación de las utilidades del capital cae de un 63% a un 58%, y la participación de los impuestos permanece estable en torno al 5%.

⁵² Viene del “bono solidario” implementado por Jamil Mahuad en 1998 para compensar la eliminación de los subsidios al gas y a la electricidad. Bajo el gobierno de Lucio Gutiérrez fue utilizado para enfrentar las consecuencias de la crisis en los sectores populares, en tanto cubría al 45% de las familias ecuatorianas (Martínez & Rosero, 2007). En este contexto, el bono pasó a llamarse “Bono de Desarrollo Humano” en tanto las transferencias monetarias fueron condicionadas: las familias debían matricular a sus hijos en las escuelas y llevarlos al sistema de salud. Apenas AP asciende al gobierno en 2007, duplicó el monto de las transferencias de \$15 a \$30 dólares, respondiendo rápidamente al apoyo popular recibido tras las elecciones.

Con todo lo hasta aquí abordado, el Estado se ha ido fortaleciendo y adquiriendo mayor autonomía con respecto a las organizaciones que se han opuesto al proyecto de AP. Esta mayor autonomía está asentada en los mayores ingresos del Estado, así como también en el vacío político sobre el cual emergió AP (Dávalos, 2012). Como una forma de apropiarse de instituciones que estaban bajo el control de organizaciones determinadas, el gobierno ha llevado adelante una política descorporativizadora con la tarea de expulsar del Estado a las organizaciones “con intereses particulares”. Lo anterior se entremezcla con una ideología meritocrática con sistemas de participación popular donde la elección de integrantes se realiza en función de los méritos individuales a través de currículums, pruebas de conocimiento, credenciales educativas, etc. (Ospina, 2009). El gobierno estima que las instituciones estatales donde prima “la decisión pública” ha pasado de 16% en 2007 a 76% en 2012⁵³ (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo - SENPLADES, 2013).

Ahora bien, la institucionalización plena del Estado aún no se ha logrado, pues aún depende en gran medida del liderazgo de Rafael Correa y de la hegemonía de AP. Es decir, la coherencia de las políticas elaboradas y de las instituciones construidas desde 2007 ha requerido grandes esfuerzos por parte de estos agentes. Así, aún no ha sido posible la estructuración del Estado en una serie de roles y posiciones que se refuercen mutuamente y que puedan ser exitosamente asumidos independiente de quien los ocupe. En este marco, un desafío es la falta de cuadros burocráticos con altos niveles educacionales, cuestión que se afina en la escasez de programas de postgrado en las universidades ecuatorianas. Frente a ello, el gobierno de AP ha implementado un fuerte paquete de becas de estudios de postgrado al extranjero. A su vez, esto ha estado imbricado con la reducción de la corrupción⁵⁴ en las instituciones estatales, la que fuera tan criticada en los gobiernos neoliberales.

⁵³ Se utiliza como indicador la “primacía del interés común en instancias estatales de decisión pública (en porcentaje), el que corresponde al cociente de la cantidad de entidades de decisión pública con representación privada minoritaria o nula con respecto al total de entidades de decisión pública.

⁵⁴ Al observar los resultados de la *Enterprise Survey* de los años 2006 y 2012, es posible identificar claramente los avances en la disminución de la corrupción según la percepción de los capitalistas: en 2006 un 18,2% de los encuestados escoge la corrupción como el mayor obstáculo al despliegue de su negocio, porcentaje que cae a un 5% de los encuestados en 2012; en 2006 un promedio de 14,1% de los encuestados afirma que espera tener que entregar regalos para poder conseguir cosas o favores con empleados públicos, porcentaje que cae a un 2,7% en 2012.

En definitiva, las formas institucionales que ha tomado el Estado ecuatoriano tienen por consecuencia inmediata continuar la política de la inclusión social, la que mantiene a las clases populares como tales. Es decir, se les interpela a través de sus condiciones inmediatas; en función de los proyectos que están disponibles para grandes segmentos de la población, pero que para ellos seguirlos implica grandes costos. A su vez, los requerimientos de la forma estatal que se está instituyendo, han obstaculizado el crecimiento y la diversificación económicos; han presionado la deuda pública al alza, y, con ella, fuerzan al gobierno a negociar las rentas extractivistas para que no haya una fuga de capitales, cuestión que le hace renunciar soberanía frente a capitales extranjeros.

Reprimarización y esfuerzos de diversificación productiva

En ese sentido, los gobiernos de Correa han profundizado el carácter primario de la economía, aún cuando existe políticas específicas para ampliar la matriz productiva, las que, se sostiene, deben ser financiadas a través de la extracción petrolera y minera.

Diversas son las presiones para reprimarizar la economía, en tanto confluyen en la necesidad de acceder a recursos que posibiliten la política de AP. Entre éstas se cuenta la persistencia de la deuda, esta vez con China como acreedor; las políticas clientelares que sostienen el apoyo electoral; la inversión pública, tanto para la expansión extractiva como para ampliar la matriz productiva; y el cada vez más cercano fin del boom petrolero en Ecuador⁵⁵. Por su parte, entre las condiciones de posibilidad de la reprimarización liderada por el Estado se cuentan, entre otros, la legitimación del proceso a través de la apropiación de rentas por parte del Estado; la existencia de un proyecto de país a largo plazo con pretensiones de estar en función del interés general de los ecuatorianos,

⁵⁵ Los precios del crudo ya han empezado a caer desde finales de 2014; y dados los yacimientos hoy conocidos en Ecuador, se estima un horizonte temporal de la extracción de dos décadas (Ruiz, 2013). Como era de esperarse, el gobierno de AP ya ha presentado algunos mecanismos para contrarrestar la caída de precio, la que implica un déficit fiscal de 5.369 millones de dólares en cuanto al presupuesto definido con un precio potencial de 79,7 dólares, cuando se espera caiga a 70-60 dólares el barril (El Universo, 2015). Si a ello sumamos la amortización de la deuda y la preventa petrolera a China, la situación se vuelve aún más problemática para un gobierno que ha debido enfrentar, sin éxito aún, el déficit estructural de la cuenta corriente, y cuyo crecimiento ha estado movido principalmente por el gasto público. La respuesta del gobierno correista ha sido reducir el presupuesto de 2015 en 1.420 millones de dólares, de los cuales 850 corresponden a inversión y 580 a gasto corriente (200 de ajuste y 380 por optimización de procesos). La contracción del gasto no es de la magnitud del déficit generado en tanto se pretende desarrollar políticas económicas anticíclicas (El Comercio, 2015).

donde la expansión de la frontera extractiva se vuelve una necesidad en el corto plazo para superarla en el largo plazo; el disciplinamiento de las fuerzas sociales del movimiento popular que tenían la capacidad de detener el avance extractivo, asegurando esta vez el Estado la viabilidad, legitimidad y seguridad de los proyectos. Con ello, el Estado facilita la apropiación de los territorios, y se mejora su capacidad de formar nuevos mercados legitimados socialmente⁵⁶. Para el capital esto implica sentar las bases de la acumulación futura de capital, la que no se expresa necesariamente en la evolución de las ganancias de los últimos años⁵⁷.

Ahora bien, ¿en qué consiste la reprimarización en términos específicos? En primer lugar, en la alta concentración que se observa, en términos monetarios y al 2012, de las exportaciones de petróleo crudo (50,2%), de banano (11%), de crustáceos (5,4%) y de pescado procesado (4,8%). La misma naturaleza de estos productos dificulta la diversificación de la matriz productiva en tanto que las capacidades necesarias para su producción / extracción no son del todo complejas para la producción de nuevos productos. En comparación al 2007, destaca la persistencia del petróleo, que concentraba el 48,2% de las exportaciones, y la aparición en 2012 de la producción de oro con un 1,59% de la canasta exportadora.

Como es posible apreciar de lo escrito, el asentamiento del patrón extractivista exportador basado en la extracción de petróleo, de minerales y en la agroindustria, no se relega simplemente a un carácter volitivo del gobierno, sino más bien a las decisiones que éste toma en función de las condiciones que enfrenta. Entre estas, prima la presión de la deuda, la que, a su vez, se sostiene en el déficit estructural de la balanza comercial⁵⁸. Frente a ello, el gobierno ha recurrido a restricciones temporales a las importaciones, como lo hizo en 2009, bajando el déficit no petrolero de 11,8% en

⁵⁶ Un ejemplo de ello es la protección de bosques a través de la conformación de un mercado de bonos de carbono, cuestión que se conoce como el programa Socio Bosques. Con ello, la fracción extractivista del capital ha tenido acceso a nuevos instrumentos financieros, y se ha otorgado a los indígenas el rol de guardabosques en la protección de estas reservas. A través de este programa se ha pasado de 151.734 hectáreas protegidas en 2008 a 878.923 en 2012 (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo - SENPLADES, 2013).

⁵⁷ Si se observa específicamente la evolución de las utilidades de las empresas petroleras, el comportamiento de estas durante el periodo de AP ha sido bastante heterogéneo. Sin embargo, y tal como sostiene Ruiz (2013), se ha posibilitado dinámicas de acumulación futura a través de la apropiación de los territorios y del agua con el apoyo de las fuerzas represivas y hegemónicas del Estado; así como el ingreso del capital ecuatoriano a nuevos mercados e instrumentos financieros, como ocurre con el mercado de car.

⁵⁸ El déficit de la balanza comercial es del orden del 4% entre 2010 y 2013 según el Banco Central de Ecuador, de la balanza comercial no petrolera, este asciende a 9,7% del PIB al 2013 (Ospina, 2014).

2008 a 7,9% en 2009. A fines de 2013 se volvió a implementar este tipo de medidas, pero esta vez con el argumento de normas técnicas de calidad, sumando esta vez un convenio con 400 empresas para que sustituyan sus importaciones. Un problema estructural de estas medidas, independiente de las decisiones que se tomen, es la imposibilidad de una política monetaria que contrarreste la apreciación de la moneda que incentiva las importaciones sobre las exportaciones.

Por el lado de la diversificación productiva, se ha implementado políticas verticales, donde una de las mayores dificultades ha sido la determinación de los sectores prioritarios. Pablo Ospina (2013) compara cinco planes donde se especifica sectores económicos prioritarios, de 2008 a 2013⁵⁹, y encuentra que el turismo, la industria de alimentos, los biocombustibles, las energías renovables, la petroquímica, la bioquímica, la farmacéutica y la biotecnología han sido constantes. Recientemente, se ha agregado como sector prioritario el de la minería, la que en 2012 constituyó el segundo sector con mayor nivel de inversión pública, y de la industrialización de productos mineros. Otro sector reciente es el de la producción de conocimiento, el cual se ve reflejado en el Yachay, ciudad del conocimiento que hoy es una gran construcción, suerte de elefante blanco, sin el capital humano necesario para poder utilizarla. Otro elemento que dificulta la diversificación, es la capacidad energética, la que se pretende ampliar a través de la construcción de hidroeléctricas (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo - SENPLADES, 2013), así como de la atracción de IED focalizada (aunque con magros resultados- (Glas, Pastor, Albornoz, Guerrero, & Solís, 2013)) y de la inversión pública⁶⁰.

HEGEMONÍA DE LAS CLASES MEDIAS, APOYO CAPITALISTA Y ARREMETIDA CONTRA UN MOVIMIENTO POPULAR CON AUTONOMÍA POLÍTICA

⁵⁹ Las diez apuestas productivas de 2008, el Plan del Buen Vivir de 2009, la Agenda de Transformación Productiva de 2010, el Código de la Producción de 2010 y el borrador del Plan del Buen Vivir de 2013.

⁶⁰ Una de las más altas de América Latina, con un 10% del PIB al 2012 frente al 4,9% promedio regional.

Frente al hecho de que las clases populares son un punto de contención, el Estado ha de crecer para satisfacer la lógica clientelar con que encuentra su stock de poder; pero, al mismo tiempo, este crecimiento presupuestario se ve detenido por las constricciones económicas del proyecto de desarrollo. Este Estado, ¿a quién representa? En Ecuador, son las clases burguesas las que instrumentalizan el Estado para sus fines; pero son las clases medias estatales y las que se forman a partir del mercado del trabajo, las que encuentran un espacio para conducir el proceso a la luz de la debilidad de las burguesías para llevar adelante un programa hegemónico. Este apartado destaca la estrategia de las clases medias en la expansión y estabilización de sus formas de vidas. A su vez, da cuenta del sostén capitalista en función de las necesidades del patrón extractivo, así como de la fragmentación política combinada con monopolización de la clase explotadora. Finalmente, se da cuenta del movimiento popular, particularmente en función de la hegemonía indígena, de su autonomía política respecto al Estado y las otras clases, y de una forma de conciencia obrera, articulada sobre la clase en sentido estricto (explotados – explotadores).

Hegemonía de las clases medias

Aquí se sostiene que el gobierno de AP se ha articulado como un gobierno de las clases medias. Estas están caracterizadas por agrupar diversos sectores de la sociedad, como profesionales liberales, burócratas del Estado, mandos medios con altos niveles de consumo, militares, entre otros; lo que las articula con una diversidad de intereses materiales entre los que se cuentan la expansión de las libertades individuales, la protección por parte del Estado ante los embates del mercado del trabajo, el aumento del consumo y la ocupación de mayores espacios en el Estado. Ahora bien, cabe distinguir las emergidas en la realización del proyecto neoliberal de las emergidas al alero del proyecto ISI. Las segundas estaban ancladas en instituciones altamente formalizadas, como el Estado, los gremios y instituciones militares. A diferencia de ellas, las emergidas en el neoliberalismo están ancladas en la expansión del consumo, credenciales educativas y de las emergentes burocracias profesionales.

En este contexto, Pablo Ospina (2009) refiere más bien a la categoría intelectuales: *“Los intelectuales son una categoría social inestable sin poder estructural autónomo. Tarde o temprano están obligados a inclinarse de algún lado. Si a la larga no se muestran dispuestos a pugnar por crear las instituciones necesarias para sustentar un auténtico poder popular, terminarán sustentando el poder del capital”*. Si bien estamos de acuerdo con la idea de que en condiciones de agudización de

la lucha de clases, las clases estratos se ven presionadas a posicionarse en función de la estructura de clase en sentido estricto; Ospina no ve las posibilidades de AP de acumular poder sin posicionarse en la lucha de clases, en tanto desconoce en este oración la estructura de clases estratos. Por otro lado, al focalizarse en los intelectuales, remite más bien un rol que pueden asumir determinadas personas en la constitución de fuerzas sociales, o bien a aquellos trabajadores que se dedican a la producción de conocimiento. En ambos casos, el grupo al que refiere resulta demasiado restrictivo para dar cuenta de la hegemonía de las clases medias dentro de AP.

En otro texto, el mismo Ospina sostiene que *"se está viendo que el límite principal de su proyecto es el estar aislado de la sociedad y de las fuerzas sociales que podrían ser su base. El corolario es buscar y plantear un proyecto demasiado centrado en el Estado"* (Ospina, 2010). Nuevamente el autor está desconociendo la estructura de clases estrato, pero también la constitución misma de fuerzas de las clases medias en torno a AP, lo que ve como una imposibilidad estructural. Con ello, el argumento de fortalecimiento del Estado se vuelve mecánico: no pueden acumular poder de otra forma. A diferencia de Ospina, aquí se sostiene que no existe una imposibilidad estructural de estos grupos para acumular poder, lo que es una cuestión empírica que puede afincarse en múltiples estructuras; por lo que la centralidad del Estado está dada más bien por el proyecto de AP, que permite a las clases medias un mayor control de las instituciones que aseguran la reproducción y expansión de sus formas de vida. Con ello, la imposibilidad de realización del proyecto de AP no tiene que ver tanto con quienes lo sostienen como con el carácter utópico de su contenido, donde podríamos clasificarlo de una sociedad capitalista de derechos universales⁶¹ el cual se afinca en la ocupación estratégica de puestos del Estado. Es bajo este proyecto, propio de las clases medias, que la acumulación entra en contradicción con la mejora permanente de las condiciones de vida de las clases populares y medias, lo que a la fecha ha sido posible gracias a la renta petrolera pero cuyas condiciones de posibilidad tarde o temprano se transformarán.

Por su parte, el instrumento partidario construido, AP, también ha vivido un proceso de institucionalización. Comenzando con una política centrada en la construcción de fuerza propia,

⁶¹ Para una crítica a esta apuesta, revisar la presentación de este libro. En síntesis, se sostiene que es una apuesta utópica dado el carácter contradictorio de la acumulación de capital y de la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores, así como de la necesidad de fortalecimiento de la clase trabajadora para mejorar sus condiciones, lo que contribuye a un proceso de agudización de la lucha de clases.

aislado de las organizaciones que poblaban el mundo de la izquierda ecuatoriana, ha pasado a constituir una alianza con dichas organizaciones en 2014, Unidos. Ante la deslegitimidad del sistema político, AP logró posicionarse como una opción viable anclada en el rechazo a la corrupción y en la formación académica de sus militantes, en un contexto de escasez de postgrados. Luego de un origen heterogéneo, ha vivido procesos de depuración a través de la “*exclusión, el ostracismo y la disidencia*” (Dávalos, 2012) de aquellos que se oponen al proyecto de gobierno. Una vez ya ha podido institucionalizarse como partido y hegemonizar las instituciones públicas, AP ha construido Unidos bajo su indudable conducción.

Por último, en función del carácter heterogéneo de las clases medias, el proyecto de AP ha entrado en conflicto con los intereses de algunos segmentos, sobre todo de aquellos que se movilizaron contra el proyecto neoliberal. Entre otros, destacan las tensiones con los empleados públicos ante las reformas “modernizadoras” del Estado, con la Unión Nacional de Educadores por las reformas al sistema de evaluación docente, con la policía tras el levantamiento general que el gobierno trató de calificar de golpe de Estado; con los grupos feministas y homosexuales ante el rechazo presidencial a la legalización del aborto y al matrimonio homosexual, así como también con grupos liberales respecto a la constitución familiar⁶².

Apoyos de una clase capitalista fragmentada monopólica

A la necesidad de fortalecer las instituciones del Estado, se debe agregar las dificultades de la clase capitalista de articularse en un proyecto común y de generar alianzas estables entre sus fracciones, y entre éstas y organizaciones de otras clases (Burbano, 2010). Con ello, la clase capitalista no ha podido cristalizar sus fuerzas como bloque en el poder, lo que permitió el asentamiento de AP. El fraccionamiento de la clase capitalista se sustenta tanto en diferencias regionales como en diferencias económicas, e incluso individuales, que derivan en intereses que en el corto plazo podrían resultar contrapuestos. Estas diferencias están cristalizadas en organizaciones partidarias diferenciadas: el Partido Liberal en la burguesía comercial exportadora, el PSC en el capital

⁶² Recientemente, Rafael Correa presentó la Estrategia Intersectorial de Planificación Familiar y Prevención del Embarazo Adolescente (Enipla) con una fuerte carga “conservadora”. Entre otros elementos, destaca la justificación “científica” y moral de la política: “las adolescentes que tienen protección de sus padres esperan más tiempo a iniciarse en el sexo”; las personas que viven “con ambos progenitores son tres veces menos propensas a perder su virginidad antes de los 16 años”; la política liberal tiende a fomentar el “placer por el placer” (Estrella, 2015).

financiero, y la Socialdemocracia en la burguesía nacional (Gaudichaud, 2008). Esta situación se condice con la imposibilidad de articulación de una oposición a AP desde los capitalistas bajo el discurso autonomista con pretensiones hegemónicas dentro de las regiones, considerando que los partidos tradicionales se han relegado a las regiones luego de la crisis política vivida con la emergencia de Correa al gobierno⁶³ (Eaton, 2014).

En este acápite se sostiene que si bien el gobierno no tiene sus bases en la clase capitalista como clase en sentido general, sí cuenta con apoyos específicos de fracciones y personas que negocian con el gobierno. Ello permite comprender la diversidad y la volatilidad⁶⁴ de los sectores escogidos para las políticas industriales verticales, en tanto producto de presiones de grupos empresariales específicos al gobierno. En términos macro, los apoyos con que cuenta el gobierno de AP están asentados en la política extractivista, tipo de inversión que requiere de alta estabilidad política dado el horizonte temporal de su retorno y la inamovilidad de la tierra, con lo que es capacidad instalada de difícil movimiento. A su vez, el Estado ha asumido la coerción de aquellos grupos que se oponen al patrón de acumulación asentado, así como también la cooptación y clientelización de sus bases a partir de las políticas públicas y la redistribución de la renta petrolera.

Por su parte, las nuevas cámaras empresariales han tenido un carácter colaboracionista con el gobierno, en tanto no apoyaron la rebelión de la policía el 30 de septiembre de 2010, se sumaron a la formulación del Código de la Producción (2010) y de la Ley de Minería (2009, modificada por última vez en 2013), así como también a la articulación de políticas para enfrentar la crisis mundial y al desarrollo de acuerdos comerciales con Europa. Ello empalma con la posición relativamente favorable al gobierno que presenta la Cámara de Industrias de Guayaquil en una evaluación de las políticas implementadas entre 2007 y 2011. Las críticas, aún cuando algunas de ellas son virulentas, están enfocadas en el proceso de transformación mismo, dando cuenta del déficit de institucionalización del proceso y anclado en la incertidumbre que genera a la inversión. Se destaca, por ejemplo, el que haya habido 6 reformas tributarias en 4 años; el estilo del presidente, al que se acusa de autoritario y personalista; y las dificultades estructurales por resolver el déficit de la

⁶³ La expresión más fuerte en Ecuador es el caso de Guayaquil, donde se ha articulado un movimiento autonomista conservador, con la pretensión de movilizar a toda la población más allá de los empresarios (Eaton, 2011).

⁶⁴ Hay sectores que se seleccionan en un comienzo, pero luego se dejan de nombrar –acuacultura, flores, pesca y derivados-, y otros que aparecen en los informes más recientes –biomedicina y farmacéutica, petroquímica, minería, nanociencia y astilleros (Ospina, 2013).

balanza de pagos y por aumentar la productividad del trabajo (Vicepresidencia Técnica Cámara de Industrias de Guayaquil, 2012).

Considerando el clima de incertidumbre abierto por la emergencia de AP, donde el peligro para los capitalistas del avance de un movimiento popular con conciencia de clase obrera, y en condiciones donde AP capturaba las narrativas críticas al proyecto neoliberal; es comprensible que en un comienzo la conflictividad del gobierno se haya centrado en los gremios empresariales. Sin embargo, una vez el periodo de cambio ha terminado para dar paso a uno de institucionalización, y una vez la conflictividad ha girado hacia el movimiento popular (Unda, 2007-2013 La Trayectoria Correísta a la Luz de los Conflictos, 2013); se genera alianzas con sectores y personas de la burguesía bajo las distinciones de burguesías nacionales – trasnacionales, productivas – improductivas y honestas - corruptas, cuestión que se constituye como parte de la estrategia de AP para avanzar al socialismo del Buen Vivir⁶⁵.

Un hito del conflicto inicial lo marca la expulsión de fracciones financieras del control del Fondo de Liquidez, en función de la Ley de Creación de la Red de Seguridad Financiera promulgada en 2008. Este fondo fue creado por la Junta Bancaria el 2000, controlada por el capital bancario en aquel entonces, y con la reforma de 2008 se pone bajo el alero de una junta con mayoría de representantes del ejecutivo⁶⁶. Otro elemento de conflictividad con organizaciones de la clase capitalista ha sido las restricciones puestas al libre movimiento del capital, como lo es el impuesto sobre los activos externos y el aumento del impuesto a la salida de capitales del 0,5% al 1% (Ospina, 2009). Un tercer hito, más reciente, lo constituye la política respecto a los medios de comunicación cristalizada en la Ley Orgánica de Comunicación, frente a la cual se opusieron férreamente las dos empresas que controlan el mercado en un 74,03%: Conecel y Otecel (Ruiz, 2013).

⁶⁵ Como se expresa “Programa, Estrategia y Táctica del Cambio Político. La Revolución Ciudadana y la Transformación Social” (Alianza PAIS, 2013), se busca alianza con los “actores sociales y políticos democráticos del Ecuador”, donde se plantea “establecer política de alianzas clara con sectores empresariales honestos, conectados con la defensa de los intereses nacionales, que incorporen valor agregado, que inviertan en el país y con niveles de responsabilidad social y ambiental”.

⁶⁶ Previo a la reforma, el fondo era utilizado para “*las necesidades de liquidez de las instituciones financieras privadas sujetas a encaje, lo que ha llevado a éstas a mantener importantes reservas líquidas en el exterior, reduciendo la capacidad de colocación y frenando el crecimiento del crédito que demandan las actividades productivas del país*” (Registro Oficial Suplemento 498, 2008).

Ahora bien, los apoyos que la clase capitalista otorga al gobierno correísta tienen su base principalmente en, como sostiene Unda (2010), *“la correspondencia del proyecto político con el movimiento real del capital”*, aún cuando los partidos tradicionales de derecha hablen de que el gobierno está acelerando un proceso hacia el socialismo y que es contrario a la “economía de mercado” y a la “democracia liberal” (Petras, 2013; Aegis Advisory, 2013; BTI Bertelsmann Stiftung, 2014)⁶⁷. El núcleo de la correspondencia está en el patrón extractivista, con la explotación minera en la Amazonía y la búsqueda por desplegar la extracción de cobre y oro, así como también el monocultivo a través de la transgenia en el campo, con el consecuente apoyo del gran capital⁶⁸. De parte del Estado, ello ha requerido resolver, en beneficio del capital, las tretas históricas en el control de la tierra y del agua; así como también, redistribuir la renta entre los distintos sectores empresariales por medio de subsidios y políticas diversas.

Otro elemento que sostiene la correspondencia del proyecto de AP con el movimiento real del capital, es su carácter antineoliberal, mas no anticapitalista⁶⁹ (Correa 2012, Cholango 2013). Aparece así la sociedad capitalista de derechos universales: dar a los que tienen menos sin quitar a los que tienen más. A su vez, la alianza con capitales transnacionales se presenta más bien en la búsqueda constante del mismo presidente de capitales externos que inviertan en proyectos mineros, eléctricos, etc.

Por su parte, la participación de Correa en el Encuentro de Manaos del 2008 con los presidentes de Bolivia, Venezuela y Brasil, da cuenta de intentos de alianza con las burguesías nacionales: *“parece que reafirma el camino desarrollista y ‘neokeynesiano’ del ejecutivo ecuatoriano, en alianza con los*

⁶⁷ Petras (2013) sostiene que existe una dicotomía en la conducta de la clase capitalista, en tanto, por un lado, se condena públicamente el gobierno de Correa, y, por el otro, los empresarios negocian privadamente contratos público-privados, sobre todo en las áreas de comunicaciones, infraestructura y banca.

⁶⁸ El 10% de las empresas más grandes controlan el 96% de las ventas y las ganancias de los 100 grupos económicos más grandes del país aumentaron en 12% entre el 2010 y el 2011. Respecto a las utilidades, los grupos económicos las han visto crecer en un 50% en comparación al periodo anterior, a la *larga noche neoliberal*. Esta situación explica, según Alberto Acosta (2013b), el que las grandes empresas hayan asumido, por ejemplo, la presión tributaria sin grandes sobresaltos.

⁶⁹ Si bien la categoría neoliberalismo agrupa experiencias heterogéneas, hay elementos del gobierno de AP que le otorgan un carácter neoliberal. Destaca el uso de métodos de la acumulación originaria para la mercantilización y apropiación por parte del capital de los territorios y recursos naturales, en la línea de la acumulación por desposesión desarrollada por Harvey (2003).

sectores más modernos de la burguesía local y algunas empresas multinacionales de América del Sur" (Gaudichaud, 2008).

Por último, cabe recalcar la fragmentación burguesa, la que se llega a presentar vía tensiones personales. Ello se comprende en un contexto de alta monopolización de la economía, donde las 400 mayores empresas han pasado a controlar el 78% del PIB en 2011, frente al 69% de 2005 (Ruiz, 2013). Al observar a nivel de mercados específicos, la situación se radicaliza con empresas que controlan casi su totalidad⁷⁰. Ello permite comprender la posibilidad de negociar apoyos sustantivos hacia el gobierno con empresarios particulares, mecanismo que presiona la emergencia de liderazgos políticos individuales que se han politizado en su relación con el Estado.

Movimiento popular: del apoyo a la ruptura

Ahora bien, así como el gobierno presentó un giro en su relación con las organizaciones de la clase capitalista, también lo hizo en cuanto a las organizaciones del movimiento popular que se fueron oponiendo a la política extractivista de AP. En un principio, AP emergió como fuerza política con simpatías y estupor de los partidos políticos tradicionales de la izquierda ecuatoriana, y luego construyó la nueva Constitución sustentándose en las fuerzas desarrolladas por el movimiento popular y por una izquierda que parecía unida en torno al proyecto del Buen Vivir. Luego de este periodo de transformación, vino el periodo de institucionalización, donde aquellas organizaciones que sostenían continuar con el proceso de transformación se fueron desgajando del consenso inicial. Un elemento que destaca de este proceso, es que la lucha de clases en Ecuador hoy tiende a articularse en torno a una retórica constitucional, donde se releva distintos artículos para dar cuenta del giro de AP (el que hegemonizó plenamente el proceso), así como también de ciertos elementos de un proyecto anticapitalista articulado sobre la imagen del Buen Vivir.

En este contexto, el mismo presidente ha debido distanciarse del proceso constituyente y acusar a los asambleístas de que *"estaban soñando con pajaritos preñados rosados cuando sesionaban en Montecristi"* (Redacción Actualidad, 2012), pues la Constitución ahora devenía en una herramienta,

⁷⁰ Los mercados más concentrados son el de bebidas no alcohólicas, donde una empresa controla el 81%; el de comerciantes alimenticios agroindustriales (supermercados), donde dos empresas controlan el 92,22%; y los vehículos, donde una empresa controla el 85,21%. El menos concentrado y que se distancia de los otros mercados, es electrodomésticos, donde la empresa que más controla tiene el 11,49% del mercado (Ruiz, 2013).

generalmente retórica, del movimiento popular para oponerse al proyecto capitalista de AP. Y es que Correa sostenía al 2007, *“los principales enemigos de nuestro proyecto son los izquierdistas infantiles y los ecologistas románticos”*, lo que se expresaba, por ejemplo, en una férrea oposición a quienes tentaran criticar la expansión extractivista: frente a los ecologistas, *“es más inmoral por defender al pájaro, al árbol, y dejar que muera la gente”* (Correa, 2007); y frente a quienes osaran la toma de tierras, *“tolerancia cero a todo el que quiera hacer paros y generar caos, anarquistas que están acostumbrados con los otros gobiernos a paralizar el desarrollo del país cuando les da la gana. Los castigaremos con todo el rigor de la ley”* (Correa, 2007). Si bien desde el principio existe indicios de la conflictividad del emergente gobierno con el movimiento popular, principalmente indígena, tuvo un carácter secundario ante la lógica de la unidad de *“todos contra la derecha”* o *“todos contra los neoliberales”*, así como también de la experiencia de unidad vivida en torno al proceso de Montecristi.

En este contexto, el gobierno ha desarrollado una construcción hegemónica en base a las demandas y las faltas del pueblo, mientras sostiene una política contra la constitución de las clases populares en sujeto político, menos aún si estas se desarrollan con autonomía del Estado y de las otras clases sociales. La estrategia es dual: se otorga concesiones materiales y simbólicas, mientras se aplica la fuerza represiva del Estado y la deslegitimización de los movimientos (Unda, 2013). Si bien esta situación no es muy distinta a la realidad de otros Estados capitalistas, la especificidad del caso ecuatoriano es el desarrollo del movimiento indígena con una conciencia clasista, lo que obliga al gobierno a cooptar las narrativas emancipadoras del movimiento bajo una conciencia ciudadanista propia de las clases medias, y a procurar su retroceso en tanto su ingreso al proyecto de AP resulta en la situación actual prácticamente imposible⁷¹. La apropiación de las narrativas populares implicó tomar las demandas del movimiento popular y desgajarlas de las proyecciones clasistas – anticapitalistas de este.

⁷¹ Se debe tener cuidado con esta afirmación, en tanto el hacer retroceder al movimiento popular indígena no implica necesariamente buscar su destrucción. La amenaza de un retorno del proyecto neoliberal conducido por las clases capitalistas es real, sobre todo en función de los problemas que pudieran causar la menor captación de recursos por parte del Estado ante las fluctuaciones de los precios del petróleo. Con ello, los sectores populares organizados pueden articularse como un stock movilizable en caso de que el aparataje estatal y AP no fueran suficientes para sostener el proyecto correísta. A su vez, el que el gobierno asuma la oposición al movimiento popular, apacigua a las clases capitalistas cuyo proyecto se vio disputado con la emergencia de organizaciones populares con autonomía política y de clase en el periodo neoliberal (véase el pick de la movilización con la caída de Jamil Mahuad y los parlamentos de los pueblos).

Por su parte, las políticas de descorporativización también golpearon al movimiento popular. Sin embargo, al interior de AP hubo voces que sostuvieron la descorporativización en función del desarrollo de un movimiento popular autónomo del Estado: se buscaba resolver la perversión de las organizaciones de la sociedad civil por la cooptación y manipulación de los agentes estatales (Bustamante, 2006). Empero, la postura que primó en AP y en el gobierno fue aquella que articuló la descorporativización desde la retórica de descontaminar las instituciones estatales de particularismos (Ospina, 2009). Uno de los más afectados de este proceso fue el movimiento indígena⁷².

Además de su expulsión de instituciones del Estado y de su deslegitimación, se desarrolló una política de control de las organizaciones de la “sociedad civil”. Destaca el reforzamiento y actualización del Reglamento del 2002 para la aprobación, control, extinción de personas jurídicas de derecho privado, con finalidad social y sin fines de lucro. A través de este reglamento se ha construido un sistema de información centralizado de las organizaciones del movimiento popular, además de desarrollar herramientas que el ejecutivo puede utilizar para la destrucción legal de organizaciones que se desvíen de los fines para los cuales fueron constituidas, o que comprometan la seguridad o los intereses del Estado.

En este marco, la participación política se estatizó (Latorre & Santillana, 2009) en función de las nuevas burocracias profesionales que ocupaban el Estado. Se conceptualizó una ciudadanía neutra, cuya participación se centra principalmente en el voto, así como se elaboró mecanismos meritocráticos para ocupar ciertos puestos del Estado. Un ejemplo de este tipo de institucionalidad es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social⁷³. Una cuestión similar ocurrió con el

⁷² Dos ejemplos. Primero, la eliminación del “Consejo de la Soberanía Alimentaria” que contaba con mayoría de representantes de la *sociedad civil* y con facultades resolutorias, e implementación del “Comité de Soberanía Alimentaria” que es meramente consultivo y que se encuentra formado paritariamente por representantes del Estado y miembros de la *sociedad civil*. Otro ejemplo es el caso de la CONAIE, la cual en junio de 2006 logró organizar y unificar a las instituciones nacionales dedicadas a políticas indígenas bajo la autoridad de las organizaciones sociales. Sin embargo, el gobierno correísta eliminó la autonomía de todas las instituciones estatales asociadas al tema indígena y las puso bajo la autoridad de los ministros respectivos.

⁷³ Este organismo designa comisiones ciudadanas que tienen la función de nombrar a titulares de organismos de control del Estado, dicese defensoría pública, superintendencias, tribunal contencioso electoral, etc. La selección de los integrantes del consejo se basa en los méritos a través de un mecanismo de concurso.

Consejo de Universidades y Escuelas Politécnicas, el cual se encontraba integrado originalmente por rectores, estudiantes, académicos y trabajadores, quienes fueron reemplazados por el “ciudadano”.

Aquí nuevamente emerge el carácter clasemediero del gobierno correísta, en tanto este tipo de participación meritocrática, nos dice Ospina (2009), se articula sobre *“los ideales de ascenso social de los técnicos de clase media convertidos en ley de la república (...) A la larga, el incentivo no es para construir organizaciones representativas sino para que cada ciudadano estudie una maestría”*.

LA ARREMETIDA DE LAS CLASES MEDIAS PROFESIONALES CONTRA LA ORGANIZACIÓN Y LA CONCIENCIA POPULAR

En este texto se ha dado cuenta de las condiciones sobre las que emerge Alianza PAIS. Por el lado de las condiciones necesarias, se cuentan la fragmentación de una burguesía monopólica; el despliegue de un movimiento popular con hegemonía indígena y conciencia obrera, que hace entrar en crisis al proyecto neoliberal, así como su retroceso ante el fracaso de la candidatura de Gutiérrez; y la emergencia de un movimiento de clases medias anclado en las escasas, aunque crecientes, credenciales educativas, en las burocracias profesionales y en la expansión del consumo. Resalta el hecho de las clases populares con conciencia de clase y una clase capitalista que no actúa con unidad de clase, como sí pretendió hacerlo a lo largo del periodo neoliberal. Una explicación de tal situación resulta ser la efectividad del gobierno de AP, vía las formas instituciones que se están cristalizando en el Estado, en contener al movimiento popular, asegurando la acumulación capitalista.

Por su parte, entre las condiciones de posibilidad de este gobierno, se cuenta el boom de los *commodities*, la deslegitimación de todo el espectro político así como también de las instituciones de este sistema, y la emergencia de gobiernos con proyectos alternativos al neoliberalismo (que aquí hemos categorizado de “progresistas”).

Hoy por hoy, el movimiento popular busca su reorganización. Dado que existe una amplia franja de militantes, sobre todo en el mundo rural e indígena, se están llevando a cabo iniciativas que permitan la unidad contra el gobierno correísta, pero con autonomía de clase respecto a los

capitalistas. Los días 5 y 6 de marzo del 2015, la CONAIE convocó a la Cumbre de los Pueblos en la Universidad Central de Quito, cuya resolución se ancla en el trinomio clases populares (estratificación social), indígenas (estructuras étnicas) y trabajadores (clases estrictas); así como también del intento del movimiento popular por disputar grupos medios, vía la incorporación de un registro ciudadanista y progresista. Con ello, se mantiene el carácter clasista del movimiento popular ecuatoriano. A su vez, se observa la emergencia de grupos dentro del movimiento indígena que están apostando a la construcción de instituciones territoriales autónomas del Estado, como una suerte de poder paralelo.

Y en cuanto al gobierno, este deberá enfrentar la reducción de las rentas petroleras dadas las últimas tendencias del precio del crudo. Con ello, AP se verá presionada a movilizar herramientas que le permitan sostener el proceso de institucionalización. Entre estas, destacan, por un lado, los crecientes personalismo y percepción de la figura presidencial como autoritaria (principalmente entre los estratos medios y altos), con lo que los esfuerzos políticos del partido y de Rafael Correa permiten sostener las formas institucionales emergentes. Y, por el otro lado, las herramientas disponibles para acceder a recursos al corto plazo son la expansión del extractivismo y la deuda, principalmente con China, país que va adquiriendo cada vez mayor control sobre el crudo ecuatoriano. La necesidad de recursos, a su vez, no solo se afina en las negociaciones con los distintos grupos de la sociedad; sino que también en la necesidad de sostener el consumo para que el valor de las mercancías dirigidas al mercado interno pueda realizarse.

Por último, cabe destacar que en la política de AP se subvalora el interés de la clase capitalista, y sobre todo de ciertas personas específicas, por retomar el control del Estado, el que ha perdido frente al avance de las clases medias. Si bien hoy ello no resulta conveniente para los capitalistas, en tanto el gobierno de AP está asegurando llevar parte de su política manteniendo niveles aceptables de gobernabilidad (para el capital), como la flexibilización del trabajo y la protección de la industria nacional frente al mercado externo. Y se subvalora también la capacidad del movimiento popular por constituirse como un agente organizado con autonomía del proyecto de AP, de las escaramuzas del Estado, y de las clases medias y burguesas.

Y es que AP rechaza en su política la realidad de la estructura de clases en sentido estricto y, con ello, la lucha de clases, y termina construyendo una alternativa al neoliberalismo en alianza con

fracciones del capital. Finalmente, como se ha mostrado a lo largo de este texto, las clases medias profesionales terminan arremetiendo contra la organización popular que se articula con independencia a su proyecto cristalizado en el gobierno y el partido.

REFERENCIAS

Acosta, A. (2013a). A modo de prólogo. In V. autores, *El correísmo al desnudo*.

Acosta, A. (2013b, Febrero). "Estamos dinamizando una perspectiva de oposición de izquierda al gobierno que presume de ser lo que no es". *Revista R*. (F. Gaudichaud, Interviewer)

Aegis Advisory. (2013). *Strategic Risk Alert: Correa's revolution set to accelerate in Ecuador*.

Albuja, V., & Dávalos, P. (2013). Extractivismo y posneoliberalismo: el caso de Ecuador. *Revista de Investigación Social*.

ALDEAH, C. (2013, Noviembre 4). El verdadero precio de las políticas sociales de Rafael Correa. www.aldeah.org.

Alianza PAIS, 2013. "Programa, estrategia y táctica del cambio político. La Revolución Ciudadana y la transformación social". Recuperado en [http://virgiliohernandez.ec/asamblea-wp/wp-content/uploads/2010/10/Programa_estrategia.pdf] el 12 de marzo 2015.

Altmann, P. (2014). Una breve historia de las organizaciones del Movimiento Indígena del Ecuador. *Cuadernos de Investigación*.

Alvarado, R. (2013, Noviembre 11). "La Revolución Ciudadana es mucho más que un tema puntual". (S. Mayor, Interviewer)

Andrade, P. (2010). Discusión en torno a coyuntura. *Ecuador Debate* n°79.

Arboleda, M. (2008). Comentarios a "Corporativismo, Estado y Revolución Ciudadana: el Ecuador de Rafael Correa" de Pablo Ospina Peralta.

Arteta, G., & Hurtado, O. (2005). Political Economy of Ecuador: the quandary of governance and economic development. In A. Solimano, *Political crises, social conflict and economic development. The political economy of Andean Region* (pp. 156-206). Edward Elgar Publishing.

Barrera, A. (2001). "Nada sólo para los indios". A propósito del último levantamiento indígena. *Íconos*.

BTI Bertelsmann Stiftung. (2014). *Ecuador Country Report 2014*.

Burbano, F. (2006). Estrategias para sobrevivir a la crisis del Estado. Empresarios, política y partidos en Ecuador. In B. Eduardo, & E. Arceo, *Neoliberalismo y sectores dominantes. Tendencias globales y experiencias nacionales*. Buenos Aires: CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.

Carlosama, M. (2000, Agosto). Movimiento indígena ecuatoriano: historia y conciencia política. *Publicación mensual del Instituto Científico de Culturas Indígenas*(17).

Cholango, H. (2013, Noviembre 11). "El gobierno de Correa es antineoliberal, pero no anticapitalista, una diferencia enorme". (G. Merino, Interviewer)

Correa, R. (2011). *Ecuador: de Banana Republic a la No República*. Bogotá: Random House Mondadori.

Correa, R. (2012, Enero 15). El desafío de Rafael Correa. (O. Pérez, Interviewer)

Cortez, D. (2011). La construcción social del "Buen Vivir" (Sumak Kawsay) en Ecuador. *Programa Andino de Derechos Humanos*.

Dávalos, P. (2012, Mayo 11). Alianza País: réquiem por un sueño. *América Latina en Movimiento*.

De la Torre, C. (2008). Protesta y democracia en Ecuador. In CLACSO, *Luchas contrahegemónicas y cambios políticos recientes de América Latina* (pp. 197-229). Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO.

De la Torre, C. (2013, Octubre). In the Name of the People: Democratización, Popular Organizations and Populism in Venezuela, Bolivia, and Ecuador. *European Review of Latin American and Caribbean Studies*(95), 27-48.

Eaton, K. (2014). Recentralization and the Left Turn in Latin America: diverging outcomes in Bolivia, Ecuador and Venezuela. *Comparative Politics Studies*, 47(8), 1130-1157.

Echeverría, J. (2013, Julio). ¿Qué mismo pasa con el modelo de la revolución ciudadana? *Enfoques*(7).

Estrella Santiago, 2015. "Gobierno impulsa un plan para fortalecer la familia". Artículo publicado en la sección Actualidad del diario El Comercio el 1 de marzo de 2015. Recuperado en [<http://www.elcomercio.com/actualidad/familia-plan-gobierno-ecuador-enipla.html>] el 12 de marzo de 2015.

Freidenberg, F. (2003). Partidos y gobiernos en Ecuador (1979-1998): gobiernos anti partidos y partidos contra gobiernos. In M. Alcántara, & E. Barahona, *Política, dinero e institucionalización partidista en América Latina* (pp. 391-448).

Gaudichaud, F. (2008, Noviembre 02). Después de la aprobación de la nueva Constitución de Ecuador. ¿De la Revolución ciudadana a la transformación social radical? *Rebelión*.

Glas, J., Pastor, W., Albornoz, E., Guerrero, J., & Solís, W. (2013). *Catálogo de Inversión para Proyectos Estratégicos*. Quito, Ecuador: Ministerio de Coordinación de los Sectores Estratégicos.

Harvey, D. (2003). *The New Imperialism*. Oxford University Press.

Korovkin, T. (2010, Noviembre). Between Class and Ethnicity: Encounters of Ecuador's Indigenous People with the Political Left. *Latin American and Caribbean Ethnic Studies*, 5(3), 331-334.

Latorre, S., & Santillana, A. (2009). Capitalismo estatal o convergencias populares. *Íconos, Revista de Ciencias Sociales*(34), 13-18.

Le Quang, M. (2010). La reestructuración de la izquierda en Ecuador. Del movimiento indígena hasta Rafael Correa. In F. Gaudichaud, *El volcán latino-americano* (pp. 111-120).

Lebrun, G. (2013, Noviembre 12). O cómo el gran ilusionista Rafael intentó darnos gato por liebre. *Rebelión*.

Martínez, G. (2006). The political economy of the Ecuadorian financial crisis. *Cambridge Journal of Economics*, 30(4), 567-585.

Martínez, J., & Rosero, J. (2007). *Impacto del Bono de Desarrollo Humano en el Trabajo Infantil*. Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social.

Ospina, P. (2009). Corporativismo, Estado y Revolución Ciudadana. El Ecuador de Rafael Correa. *Culturas Políticas en la Región Andina*.

Ospina, P. (2013, Julio). Ecuador: el nuevo período de gobierno y el cambio de la matriz productiva.

Ospina, P. (2014, Agosto). Reelección y modelo económico.

Petras, J. (2013). Ecuador: left-center political regimes versus radical social movements. *Rebelión*.

Ponce, J., & Acosta, A. (2013). La pobreza en la "revolución ciudadana" o ¿pobreza de revolución? *Ecuador Debate n°81*.

Ramírez, F. (2008). El Movimiento Indígena y la reconstrucción de la izquierda en Ecuador. En: *Los Andes en Movimiento. Identidad y poder en el nuevo paisaje político*. Pablo Ospina, Olaf Kaltmeier y Christian Büschges (eds).Universidad Andina Simón Bolívar,Corporación Editora Nacional, Universidad de Bielefeld. Quito-Ecuador

Ramírez, F. (2010a). Fragmentación, reflujo y desconcierto. Movimientos sociales y cambio político en el Ecuador (2000-2010). *Revista OSAL*(28), 18-47.

Redacción Actualidad. (2012, Julio 22). Primer Mandatario propone reformar "hipergarantismo". *El Telégrafo*, p. 3.

Registro Oficial Suplemento 498. (2008, Diciembre 31). LEy de Creación de la Red de Seguridad Financiera.

Romero, M. (2010). Discusión sobre coyuntura. *Ecuador Debate* n°79.

Ruiz, M. (2013). Parte I. In M. Ruiz, & P. Iturralde, *La alquimia de la riqueza. Estado, petróleo y patrón de acumulación en Ecuador* (pp. 21-138). Quito: Centro de Derechos Económicos y Sociales - CDES.

Salto, N. (Diciembre de 2002). Lucio Gutiérrez: un proyecto en disputa. *Iconos. Revista de Ciencias Sociales*(15), 11-14.

Santillana, A. (2006). Proceso organizativo y límites del proyecto político de Pachakutik. In P. Ospina (Ed.), *En las fisuras del poder: movimiento indígena, cambio social y gobiernos locales*. Instituto de Estudios Ecuatorianos.

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo - SENPLADES. (2013). *Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017*. Quito, Ecuador: Senplades.

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo - SENPLADES. (2015). *Valores / Misión / Visión*. Retrieved Marzo 8, 2015, from Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo - SENPLADES: <http://www.planificacion.gob.ec/valores-mision-vision/>

Unda, M. (2010). Discusión en torno a la coyuntura. *Ecuador Debate* n°80.

Unda, M. (2013, Julio). 2007-2013 La Trayectoria Correísta a la Luz de los Conflictos. *Enfoques*(7).



Vicepresidencia Técnica Cámara de Industrias de Guayaquil. (2012). *Breve evaluación de las políticas del gobierno: 2007 - 2011*. Guayaquil: Cámara de Industrias Guayaquil.